

**SIMPÓSIO 39****LA MEMORIA EN EL HOLOCAUSTO DEL PALACIO DE JUSTICIA****Por Luis Bernardo Díaz G.**

Me propongo hablar de la toma y contratoma del **Palacio de Justicia** en Bogotá. El Palacio de Justicia era la sede de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el archivo de ambas entidades y de una valiosa y bien documentada biblioteca. 35 guerrilleros del Movimiento 19 de abril M19 a las 11.20 a.m. hora local penetran por la zona de aparcamiento y se toman las instalaciones, reteniendo a cerca de 400 personas que se hallaban en el interior del Edificio, en el corazón de Bogotá. La columna del M19 se autodenominaba "Iván Marino Ospina" y la operación la llamaron "Antonio Nariño por los Derechos del Hombre". Según el M19, la toma de la Corte Suprema de Justicia tenía por único objeto exigir la publicación de los documentos de los Acuerdos de Paz y las actas de la Comisión de Verificación, para que "toda la Nación pueda establecer la verdad sobre el proceso de paz". Denunciaban la actitud del Gobierno de Betancur de "impedir que la Nación conozca y juzgue, y su negativa a todo diálogo en procura de soluciones incruentas".

La intención era realizar una especie de juicio a Betancur y su Gobierno, para lo cual la Corte Suprema iba a ser el epicentro del juicio, mediado por la publicación de una serie de documentos y requerimientos en los principales diarios de la Nación y en las cadenas radiales. Finalmente, se buscaba realizar una consulta popular radial con base en las siguientes preguntas:

- a) ¿Cuál es su exigencia más apremiante? y
- b) ¿Este Gobierno le ha cumplido?

Indudablemente los guerrilleros del M19 pensaban que irían a tener el mismo impacto que con la toma de la Embajada de la República Dominicana efectuada en febrero de 1980, en la cual retuvieron a varios miembros del Cuerpo Diplomático, y cuya "solución" fue el pago de U\$1.200.000 y su exilio a Cuba. No esperaban la reacción violenta de las Fuerzas Armadas, que dominaron a sangre y fuego la situación, con la connivencia del Presidente Betancur.

¿Por qué si Turbay negoció con los guerrilleros que se tomaron la Embajada, no negociaba Betancur con los que se tomaron el Palacio? La respuesta está para los analistas políticos, o para algún arúspice, pues nunca se intentó siquiera el menor contacto para la negociación, ya que lo que hubo fue una contratoma por parte del Ejército y la Policía en una forma sangrienta jamás vista, con el peligro que conllevaba consecuentemente: la vida en juego de los rehenes. Ver en el Anexo 3 el Manifiesto del M19 preparado pero no hecho público, sobre la "Operación Antonio Nariño por los Derechos Humanos"

La réplica de las autoridades fue inmediata: el Ejército lanzó sus carros (tanques

desproporcionados) de combate hacia el interior mismo del Palacio de Justicia. Los combates duraron 27 horas, hasta la destrucción del interior del edificio y la muerte de 115 personas, incluyendo 35 guerrilleros (todos), 11 militares, 17 Magistrados de la Corte Suprema (incluyendo su propio Presidente) y empleados del Palacio de Justicia. Igualmente, se denunciaron varios desaparecidos entre guerrilleros sacados con vida y rehenes confundidos, situación aún no aclarada. El incendio del Palacio generado por el calor de las bombas enviadas por los militares calcinó los cuerpos y destruyó todo el edificio, que aún hoy no ha sido reconstruido y que ha costado 38.000 millones de pesos (26 millones de dólares). Hubo 244 personas "rescatadas". También 22 lesionados civiles y 31 del personal de las Fuerzas Armadas.

La fecha inicialmente escogida por el M19 para dicha toma fue la de 18 de octubre porque se encontraba en Colombia el Presidente de Francia, pero la detención de dos guerrilleros con los planos del Palacio de Justicia, un anónimo al Ministro de Defensa el hallazgo -más tarde- del casete con la proclama del M19 para ella, y todo esto publicado en la prensa, provocó fuertes medidas de seguridad. A pesar de ello, tales medidas se suspendieron (sin que quede claro por qué) el 5 de noviembre y el M19 procedió a llevar a cabo el Operativo Antonio Nariño "por los Derechos del Hombre" el 6 de noviembre a las 11.35 horas y a las 11.40 empezó a llegar la fuerza pública.

En la tarde, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Magistrado Alfonso Reyes Echandía, habló por teléfono con una radiodifusora, clamando angustiado: "... somos rehenes del M19, por favor díganle al Presidente que cese el fuego porque si no habrá una hecatombe" y más tarde el Magistrado Montoya Gil, también rehén, imploraba: "De por Dios, llamen a la fuerza pública y díganle que no siga disparando sobre nuestras oficinas porque nos van a matar".

Al día siguiente, después de que fuera tomado el Palacio, las fuerzas militares iniciaron la "Operación Rastrillo". El Consejero de Estado Reynaldo Arciniegas - encerrado con más de 60 personas en un baño de dicho Palacio- sale, con el acuerdo de rehenes y guerrilleros, diciendo quién es y que desea hablar con los militares y se dirige a un general y dos coroneles que se hallan también en el interior de la edificación, explicándoles que arriba hay inocentes, que los guerrilleros piden un periodista, un miembro de la Cruz Roja y dialogar; los oficiales le respondieron: "Tranquilo, vamos a ver qué hacemos"; no lo dejan subir de nuevo, habla con el Secretario del Ministerio de Defensa, va a la Casa del Florero (museo vecino donde los militares están llevando a los rescatados), lo llevan al hospital y el mensaje nunca llega al Presidente de la República.

Sobre los desaparecidos, a pesar de que el Comandante de la XIII Brigada, General Armando Arias Cabrales, aseguró que ninguna persona relacionada con la toma estaba presa, los familiares de los 12 desaparecidos en la cafetería del Palacio (que no se incendió) tienen bases serias para pensar lo contrario. Habría que citar a declarar a Enrique Rodríguez, Presidente de la Asociación de Familiares Desaparecidos del Palacio. Los empleados de la cafetería desaparecidos fueron: Carlos Augusto Rodríguez Vera, administrador; Bernardo Beltrán Hernández, mesero; Gloria Stela Lizarazo Figueroa, encargada del autoservicio; Luz Mary Portela León, lavaplatos. David Suspes Celis, chef. Ana Rosa Castiblanco Torres, 7 meses de

embarazo, auxiliar del chef. Héctor Jaime Beltrán Fuentes, mesero. Cristina del Pilar Guarín Cortés, cajera. Norma Constanza Esguerra Forero, proveedora de pasteles. Otros: Lucy Amparo Oviedo Bonilla de Arias, buscaba empleo y tenía una entrevista. Gloria Anzola Mora de Lanao, sobrina de la Consejera de Estado Haydée Anzola, guardaba su coche en el parqueadero del Palacio. También se vieron salir del Palacio vivas (hay testimonios filmicos) y fueron desaparecidas las guerrilleras Irma Franco Pineda, abogada, y Clara Elena (o Gloria) Encizo Hernández (alias Diana Cazadora). Estuvieron en la Casa del Florero.

Los Magistrados muertos fueron: Alfonso Reyes Echandía, presidente y miembro de la Sala Penal, coautor de la Ley de Indulto a los guerrilleros del M19, lo que desmiente el que haya sido asesinado por el comando guerrillero. Fabio Calderón Botero, Sala Penal. Manuel Gaona Cruz, Sala Constitucional, dio voto de constitucionalidad a favor de la Ley de Indulto y estudiaba la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el Tratado de Extradición con EE.UU. José Eduardo Gnecco Correa, Sala Laboral. Fanny González Franco, Sala Laboral, primera mujer en dicha Corte. Carlos José Medellín Forero, Sala Constitucional, votó a favor de la Ley de indulto, estudiaba demanda contra el Tratado de Extradición. Luis Horacio Montoya Gil, Sala Civil. Alfonso Patiño Roselli, Sala Constitucional, votó a favor de la Ley de indulto, estudiaba demanda contra el tratado de extradición. Pedro Elías Serrano Abadía, Sala Penal. Darío Velásquez Gaviria, Sala Penal. Magistrados auxiliares: Emiro Sandoval Huertas, Julio César Andrade Andrade, Jorge Alberto Correa Echeverry y Juan Lisandro Romero Barrios.

Los guerrilleros muertos fueron: Alfonso Jacquim Gutiérrez, de quien se dice que fue visto saliendo del Palacio con los brazos en alto y sonriendo, llevado a la Casa del Florero, reconocido por los militares y luego desaparecido por ellos. Luis Francisco Otero Cifuentes, José Domingo Gómez Castiblanco. Ariel Sánchez. Marcela Sossa y Guillermo Helvecio Ruiz Gómez, Andrés Almarales Manga, William Arturo Almonacid Rodríguez, Humberto Lozada V., Edison Zapata Vásquez, Elkin de Jesús Quiceno Acevedo, Fabio Becerra Correa, Héctor y Orlando Chaparro Vélez, Diógenes Benavides Martinelli, Alberto Nicolás Erazo Murcia, Fernando Rodríguez Sánchez, Gerardo Jiménez, Héctor Arturo Lozano Riveros y Jesús Antonio Rueda Velasco.

El Presidente Belisario Betancur se responsabilizó de lo acontecido en alocución televisiva y radial registrada por muchos periódicos (Anexo 3) y días después le dijo a "Le Nouvel Obsevateur" que en circunstancias similares él volvería a repetir el operativo militar del Palacio del 6 y 7 de noviembre del 85 (citado por Jorge Child, en El Espectador, diciembre 17 de 1985), cuyas imágenes dantescas se olvidaron por las pavorosas del desastre natural de Armero ocurrido 8 días después y que mató a 28.000 personas, cuya ayuda humanitaria en su mayor parte se la robaron personas del Gobierno de Betancur, tal y como ocurrió en Nicaragua con el Gobierno de Alemán que hurtó la ayuda por el huracán Mitch. Definitivamente la muerte se ensañaba contra los colombianos, que apenas despertaban de un holocausto y se sobreponían al terremoto de Popayán con centenares de muertos.

La responsabilidad del Ministro de Defensa General Miguel Vega Uribe es patente al

expresar: "Al terrorista sólo le importa matar al hombre para producir un desconcierto total, tanto que a veces se asesinan entre ellos mismos". (General Vega Uribe, "El Tiempo", 13-XII-85).

El oficial de la Policía José Luis Vargas Villegas estuvo presente en el teatro de operaciones y, bajo la coordinación del Comandante de la XIII Brigada, tomó parte en la dirección y coordinación de ese operativo. Este oficial no fue objeto de ninguna investigación.

Desde el principio del operativo militar parece ser que las Fuerzas Armadas obstaculizaron cualquier comunicación entre el presidente y el Comando guerrillero; impidieron intentos de negociación y de mediación; desacataron órdenes de búsqueda de conversación impartidas por el Consejo de Ministros; cortaron las líneas telefónicas del Palacio y generaron los incendios que calcinaron a los rehenes. El operativo militar no apuntó en ningún momento a rescatar con vida a los rehenes. El oficial Víctor Alberto Delgado Mallarino, como Director General de la Policía, desatendió una orden impartida por el Presidente y el Consejo de Ministros, y ordenó a sus efectivos del COPEs y del GOES atacar al grupo de guerrilleros atrincherados con rehenes en el 4 piso del Palacio. No fue condenado, por prescripción del delito. (Ver anexo 3). El Capitán Anatolio o Antonio Correa Figueroa, de la Policía, al mando de un grupo élite, ingresó al 4 piso del Palacio. Allí, según las necropsias, guerrilleros y rehenes fueron en su inmensa mayoría acribillados con proyectiles disparados por las Fuerzas Armadas. Sin embargo, este oficial no fue investigado por nadie.

Dos estudiantes fueron torturados en el operativo. El oficial de la Policía Luis Gabriel Bayona Borrero, como miembro del F-2, colaboró estrechamente con el equipo del B-2 de la XIII Brigada que ordenó las 13 desapariciones y torturó a los estudiantes Yolanda Santodomingo y Eduardo Matzon Ospina. No fue nunca investigado.

Los 13 desaparecidos, capturados por el Ejército en diferentes momentos del operativo militar, fueron conducidos al puesto del B-2 de la XIII Brigada instalado provisionalmente en la segunda planta de la Casa Museo del 20 de julio, ubicada a escasos metros del Palacio de Justicia. Según las confesiones del exagente de inteligencia militar, Bernardo Alfonso Garzón Garzón, una de las desaparecidas, Irma Franco Pineda, fue posteriormente conducida a las instalaciones de la XX Brigada, con pleno conocimiento y aprobación del Comandante de esa unidad, oficial Hernando Camilo Zúñiga Chaparro. Sin embargo, este oficial no fue objeto de investigación alguna. El Teniente Coronel Fernando Blanco Gómez como Segundo Comandante del Batallón de inteligencia BINCI "Charry Solano", debió de conocer de la remisión de los desaparecidos a su Batallón, pues algunos fueron allí enviados, y por tanto está involucrado en su desaparición.

El Ministro de Defensa Miguel Vega Uribe tuvo la suprema dirección del operativo, como Ministro de Defensa, utilizando para el efecto el nombre clave de "coraje 6", como se descubre en las grabaciones (ver anexo 3). La Comisión de Acusaciones de la Cámara iniciaría el proceso contra el General Vega, a instancias del parlamentario Jorge Franco -hermano de una desaparecida-, archivando el proceso. Para algunas

organizaciones internacionales el operativo arrojó 43 civiles y 33 guerrilleros muertos, la gran mayoría de ellos por disparos hechos por las Fuerzas Armadas; 11 civiles y 2 guerrilleros desaparecidos por miembros de la XIII Brigada de las Fuerzas Armadas y 2 estudiantes torturados por el Ejército y la Policía. El General Celso Suárez Martínez del Ejército fue uno de los comandantes militares que intervino con mando sobre tropa en el operativo. Además, existen serios indicios de que varios desaparecidos, una vez interrogados en las dependencias del B-2 de la XIII Brigada, en la segunda planta de la Casa Museo del 20 de julio, fueron conducidos al batallón de Policía Militar bajo su comando. Sin embargo, este oficial no fue investigado por ninguna autoridad.

El Coronel del Ejército Edilberto Sánchez Rubiano, quien utilizaba el nombre de "Arcano 2" (Ver anexo 3), ordena la desaparición de Irma Franco y es cómplice de la desaparición de Gloria Anzola, Lucy Amparo Oviedo, Norma Constanza Esguerra, Cristina del Pilar Guarín, Carlos Augusto Rodríguez y 6 civiles más, junto a otro guerrillero, que salieron con vida del palacio. Igualmente se estableció que algunas de las personas detenidas en los sótanos del Palacio, y que están desaparecidas, fueron llevadas al B-2 de la Casa Museo del 20 de julio por orden expresa del oficial Carlos Alberto Fracica Naranjo. En 1992 Sánchez Rubiano fue absuelto y el caso archivado. El Teniente Coronel Fracica tampoco fue investigado por la desaparición de los 8 empleados de la cafetería y la de Gloria Anzola.

El General del Ejército Rafael Samudio Molina, como Jefe del estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, tuvo el mando del operativo, durante el cual se identificaría bajo el nombre de "Paladín 6", como lo demuestra el desglose de las grabaciones de la contratoma. Sin embargo, este oficial nunca fue procesado ni penal ni disciplinariamente. Al contrario, fue luego nombrado Ministro de Defensa de Barco Vargas (86-88) y Embajador en la Dictadura de Pinochet en Chile (tal para cual). Promovió grupos militares en el Magdalena Medio.

El Coronel Luis Carlos Sadovnick Sánchez es uno de los comandantes del operativo militar de contratoma y como tal debería ser investigado. Nunca recibió ni siquiera una citación.

El Coronel Luis Alfonso Plazas Vega, quien tomó parte en el operativo militar con el nombre clave de "Arcano 5", dio la orden de desaparecer a una de las integrantes del Comando del M19, Irma Franco Pineda. Pese a las pruebas existentes en su contra, ni el Juzgado 14 Superior de Bogotá, ni la jurisdicción Penal Militar (Proceso 13,287, Auditoría de Guerra, XIII Brigada), ni la Procuraduría General de la Nación (Exp. 53-666/1271), que investigaron los hechos, vincularon al oficial Plazas Vega. Como antecedentes, Plazas entre 1981 y 1982 creó y dirigió el grupo paramilitar MAS Muerte a Secuestradores. También tuvo nexos con el narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, con quien creó una estructura paramilitar en el noroccidente de Cundinamarca en 1985. El Mayor Luis Alvaro Rodríguez Fontecha (ya muerto por el EPL) fue uno de los oficiales del Batallón Bárbula que participó en el M.A.S., financiado por la Texas Oil Petroleum, entre otros. Como premio, a Plazas se le mandó a la Embajada de España, como adjunto, en 1989. Luego aspiró al Senado con el lema: "Defendiendo la democracia, maestro!", frase que se hizo célebre en la contratoma, porque era la que pronunciaba a los medios de comunicación cuando

dirigía el operativo, teniendo como telón de fondo los cañonazos y los disparos que incendiaron el Palacio. El Mayor Gustavo Enrique Lux Gutiérrez fue uno de los que integró el grupo paramilitar auspiciado por Plazas, con el apoyo del narcotraficante Rodríguez Gacha. Nunca fue investigado. El Capitán Marco Antonio Salazar Duque era parte del MAS y asesinó a Dagoberto Henao Mira en marzo de 1983 en Puerto Nare (Antioquia). El coronel Jaime Eduardo Sánchez Arteaga fue el principal creador del grupo paramilitar. El teniente del Ejército Luis Antonio Meneses Báez ayudó a crear y organizar este grupo del MAS. Según su propia confesión -ante la Dirección de Policía Judicial e investigaciones en noviembre de 1989-, Meneses entrenó y dirigió a paramilitares en Puerto Boyacá, entre 1981 y 1982.

El General Rafael Hernández López está seriamente comprometido en la desaparición de 8 empleados de la cafetería y de otros, según el testimonio del soldado José Yesid Cardona, varios de los cuales fueron llevados a la Escuela de Artillería por un grupo que él comandaba, y luego desaparecidos. Nunca fue investigado.

El Mayor Miguel Angel Cárdenas Obando fue uno de los integrantes del B2 encargados de identificar e interrogar a las personas rescatadas, así como de decidir la suerte que tendrían. Este oficial ha debido ser investigado por su participación en la múltiple desaparición. Sin embargo, nunca lo fue.

El oficial Jesús Armando Arias Cabrales tenía el mando directo de las tropas de la XIII Brigada y de la Policía que intervinieron en las operaciones, durante las cuales se identificó como "Arcano 6". También participó en la creación de grupos paramilitares en el Magdalena Medio y en la desaparición de María Eugenia Castañeda Grandas en septiembre de 1985. Tuvo sanción de destitución de la Procuraduría en 1991, lo que le costó el puesto a un Procurador, pero nunca fue procesado penalmente.

En el Palacio funcionaba el Consejo de Estado que había fallado demandas en contra de militares torturadores (caso Olga López, bajo el Gobierno de Turbay Ayala), que involucraban al propio Vega Uribe, quien no tenía el menor interés en ser juzgado por sus crímenes al frente de la XIII Brigada.

Resulta curioso que se salvaran el hermano del Presidente Jaime Betancur Cuartas, Magistrado del Consejo de Estado, y la esposa del Ministro de Gobierno Jaime Castro, Clara Forero, también Consejera de Estado. Esto indica el grado de protervidad del Ejecutivo, que deja a su suerte a los otros magistrados y personal, distinto a sus parientes más próximos.

La guerrillera Irma Franco Pineda salió con vida y fue llevada a la Casa del Florero por los militares y luego desaparecida, junto con Alfonso Jackim.

El Magistrado José Eduardo Gnecco Correa fue alcanzado por una granada del Ejército que le voló la cabeza y las manos. (El Espectador, dic. 7/85. Silva Rivas, Gonzalo. "Incidente de Mingobierno con Ignacio Vives Echeverría").

El Comandante del Operativo del Palacio fue el General Jesús Armando Arias

Cabral, Comandante de la XIII Brigada, quien no defendió el derecho de los rehenes en un conflicto armado. El Congreso lo condecoró.

El Comandante de la Policía era el General Víctor Delgado Mallarino, quien desoyó los consejos al diálogo del Ministro de Justicia, Enrique Parejo González.

En el periódico El País de Madrid del 20-V-86, p. 4., se detecta que los militares eran conscientes de que su intervención estaba dirigida a abortar la propaganda del M19, antes que salvar la vida de los rehenes. Para algunos, los jefes militares protagonizaron un golpe de Estado de 3 horas, golpe desmentido por Betancur y sus ministros, quienes asumieron la responsabilidad de lo sucedido (aunque el Ministro de Justicia dijo que el Ejército actuó por su cuenta, en El País, 15-VI-86, p. 4). Betancur en su alocución televisiva dijo haber recibido el "sabio consejo" de los expresidentes Turbay y López para el manejo de la situación y asumir toda la responsabilidad sobre el asalto militar del Palacio y el trágico desenlace.

Para Antonio Navarro, exguerrillero del M19 (actualmente es senador de la República), la toma buscaba simplemente evidenciar la verdad: "Su única petición era la publicidad de documentos oficiales, mantenidos ocultos por el gobierno, que contienen la verdad sobre el proceso de paz. Tan responsabilizados salen Belisario Betancur y su Ejército que el presidente colombiano llenando de oprobio el nombre del país prefirió sacrificar a sangre y fuego decenas de personas antes de ceder a su difusión, en un holocausto propio de las peores dictaduras. Trató de taparse la sangre con sangre. Trató de borrar la verdad con fuego. Que no ose a volver a pronunciar la palabra paz porque ha quedado claro ante el mundo que su paz es la paz de los sepulcros construidos sobre el cadáver de la democracia. La verdad silenciada y la sangre de los caídos claman justicia. No hay sitio en el mundo en el cual pueda escapar Belisario Betancur de su conciencia ni de la justicia de Dios ni de los hombres". (Hay carta de Antonio Navarro Wolf, Mando Central del M19 de 7 de noviembre de 1985).

Están, igualmente, las declaraciones de exguerrilleros del M19 vivos: Germán Rojas Niño (alias Raulito), Marcos Chalita (exconstituyente), Otti Patiño (Observatorio de la Paz) y Vera Grave (Idem). Rosemberg Pabón Pabón (Alcalde de Yumbo), Arjaíd Artunduaga (excongresista), Everth Bustamante (senador), Rafael Vergara, Gerardo Ardila, Eduardo Chávez, Alix Salazar y Gustavo Petro (actual alcalde de Bogotá).

También es fundamental recabar el testimonio de Yesid Reyes Alvarado -hijo del Magistrado inmolado- (Minjusticia de Santos), Carlos Medellín Forero, hijo de otro Magistrado muerto. El abogado Antonio José Cancino Moreno, quien estuvo refugiado en Madrid y profesor de derecho Penal en la Complutense, tiene importantes aportaciones para realizar en el caso.

Betancur asumió la responsabilidad de todo cuando dijo el 7 de noviembre: "Esa inmensa responsabilidad la asumió el Presidente de la República que para bien o para mal suyo estuvo tomando personalmente las decisiones, dando las órdenes respectivas, teniendo el control absoluto de la situación de manera que lo que se hizo para encontrar una salida, fue por cuenta suya y no por obra de otros factores que él puede y debe controlar...".

Yesid Reyes le mandó una carta a Betancur rechazando un Decreto de honores, por no haber escuchado los clamores de su padre asesinado: "No olvide nunca, Señor Presidente, estas palabras de mi padre: 'paradoja brutal es la del juez que, siendo titular del soberano poder de juzgar a los hombres, sea al propio tiempo el más indefenso de los mortales. En un Estado de Derecho todo el poder material de las armas ha de estar al servicio del más humilde de sus jueces; sólo así será posible oponer con ventaja a la razón de la fuerza, la fuerza de la razón". Los jueces, representados por Asonal judicial, también pararon y repudiaron el ataque al Palacio, así como los estudiantes universitarios.

Diez años después, Yesid Reyes comentaba los intrínquilis (El Espectador, 5-XI-95, p. 4): "Fue imposible hablar con alguien incluso con amigos de papá como Jaime Castro, el General Delgado, otro gran amigo de papá, o el general Maza Márquez". Media hora más tarde Reyes Echandía tranquilizó a su familia al advertir que sus amigos le habían prometido el cese el fuego. Sólo restaba esperar. "Murió convencido de que sus amigos de más de 20 años le estaban diciendo la verdad...Estoy absolutamente convencido de que lo engañaron. De nada sirvió ni siquiera la intervención de Gabriel García Márquez o de una comisión negociadora. El jueves como a las 11.30 de la mañana hablé con el General Delgado Mallarino quien me aseguró que se había comunicado esa mañana con papá y que él estaba bien. Todo terminó siendo falso, pues papá murió en la tarde del 6 de noviembre". Y agregó: "Estoy convencido de que el Gobierno del Presidente Betancur fue el responsable de la muerte de todos los ocupantes del Palacio de Justicia...Lo único seguro de la muerte de mi padre es que en su cuerpo calcinado apareció una bala, murió antes del incendio, con un proyectil que no provino de la guerrilla". Debe pedirse la exhumación del cadáver y procederse a constatar el origen del proyectil y cotejarlo con las armas usadas tanto por la guerrilla, como la del cuerpo castrense para verificar de donde provino la bala.

Los testimonios de Reinaldo Arciniegas y Aidée Anzola son bastante dicentes de la negativa del Gobierno por rescatar a los rehenes con vida.

Para el Magistrado de entonces Humberto Murcia Ballén "esta fue una toma anunciada y consentida por el Gobierno" (El Espectador, 9-XI-85, p. 11 A). Este magistrado está vivo, aunque perdió en el asalto su prótesis.

La reconquista militar del Palacio de Justicia -denominada por los militares "Operación Rastrillo"- queda al descubierto con las grabaciones desclasificadas que claramente identifican a los autores a sangre y fuego de la contratoma, sin que mediara algún intento de diálogo. (El País, viernes 20 de junio de 1986).

En El País (15 de junio de 1986, p. 4) el Ministro de Justicia Enrique Parejo denuncia que el Presidente Betancur no le contestó la llamada al Presidente de la Corte Reyes Echandía cuando pedía el cese el fuego. Delegó esa labor en el Comandante de la Policía Reyes. El Ministro de Justicia (Parejo) manifiesta haberle dicho al General Delgado Mallarino que era conveniente suspender las acciones mientras se intentaba una comunicación con Andrés Almarales, uno de los dirigentes del M19 que se tomaron el Palacio. Concretamente Parejo dijo que se intentaba que el Grupo de Operaciones Especiales GOES cesara en su intento de llegar a la cuarta planta del



edificio, donde se presumía que estaban los guerrilleros con varios rehenes. Sin embargo, poco después y mientras se intentaba una comunicación telefónica con Almarales, el General Delgado anunció que el cuarto piso ya había sido ocupado por la policía y que los temores expuestos por Parejo, según los cuales una acción policial podría acarrear la muerte de los rehenes, "eran infundados, pues se acababa de informar que en ese piso no se había encontrado a nadie, ni vivo ni muerto". El Ministro de Justicia expresó en su declaración que esa explicación resultó falsa. Lo cierto es que el Presidente de la Corte apareció muerto en el cuarto piso, desmintiendo a los propios militares.

Con su actuación, el Gobierno Nacional -incluyendo sus fuerzas armadas, vulneraron el Derecho Internacional, la Constitución Nacional, el Código Penal Colombiano y el Reglamento Militar. El abogado Eduardo Umaña Luna (actualmente profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, quien debe citarse, porque su hijo Eduardo Umaña Mendoza llevaba el caso del Palacio y para acallararlo fue asesinado en 1998 por parte de miembros de la Brigada XX) citó los Convenios de Ginebra, para mostrar cómo ellos fueron violados por el Gobierno colombiano. Umaña establece la responsabilidad constitucional y penal del Jefe de Estado y su Ministro de Defensa (Ver "Colombia Hoy Informa", Año VII, N° 46-47, Bogotá, 1986).

Mediante Ley 5 de 1960 el Congreso Colombiano aprobó los acuerdos de la Conferencia Diplomática de Ginebra de 12 de agosto de 1949. Para nuestro propósito es de interés el Convenio N° 4, que en su artículo 3° dice: "En caso de conflicto armado sin carácter internacional, y que surge en el territorio de una de las altas partes contratantes, cada una de las altas partes contendientes tendrá la obligación de aplicar por lo menos las disposiciones siguientes:

1. Las personas que no participen directamente en las hostilidades..., incluso los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas que hayan quedado fuera de combate por enfermedad, herida, detención, o cualquier otra causa, serán en toda circunstancia tratadas con humanidad sin distinción alguna de carácter desfavorable basada en la raza, el color, la religión o las creencias, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio moral. A tal efecto, están y quedan prohibidos en cualquier tiempo y lugar, respecto a las personas arriba mencionadas: a) Los atentados a la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, torturas y suplicios; b) La toma de rehenes; c) los atentados a la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes; d) Las condenas dictadas y las ejecuciones efectuadas sin previo juicio emitido por un tribunal regularmente constituido, provisto de garantías judiciales reconocidas como indispensables para los pueblos civilizados.

2. Los heridos y enfermos serán recogidos y cuidados; si un organismo humanitario imparcial tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja logra ofrecer sus servicios a las partes contendientes, las partes contendientes se esforzarán por poner en vigor por vía de acuerdos especiales, la totalidad o parte de las demás disposiciones del presente convenio...".

Esta norma hace parte obligatoria del mandato jurídico nacional, y se violó totalmente con lo acaecido en el Palacio.

Dijo el Procurador Jiménez: "La Constitución asimila para los efectos en discusión, la guerra exterior a la conmoción interior, para decir que si como consecuencia de conmoción interior, el Presidente ha declarado turbado el orden público y en estado de sitio el territorio nacional, rigen las reglas aceptadas por el Derecho de Gentes para la guerra entre naciones. O sea que bajo estado de sitio, todo hecho bélico relacionado con el motivo originario de su declaratoria está cobijado por el Derecho de Gentes".

Para Umaña Luna: El Procurador habló apenas de culpa penal, la culpa penal puede darse o por imprudencia o por negligencia; pero el Procurador no se atrevió a hablar de clara intención dañina con voluntad, con acto volitivo de causar daño; donde ya no se puede hablar de situación culposa sino de situación abiertamente dolosa, dañina, mal intencionada; y cuando es exagerada, verdaderamente criminal... Aunque no existiera esta Ley ni estos convenios de Ginebra, parece que la discusión se ha tratado sobre si se aplica o no el artículo tal del convenio tal. Se impondría el *ius gentium* en su esencia de guerra entre naciones que no ha desaparecido en la modernidad: lo que pasa es que el Convenio Internacional le viene a dar más fuerza y vigor, más énfasis, más reiteración. O sea que bajo el Estado de Sitio todo hecho relacionado con la causa de su declaratoria está cobijado por el Derecho de Gentes".

En el caso del art. 121 de la Constitución Nacional vigente para entonces se estipulaba: "En caso de guerra exterior o de conmoción interna, podrá el Presidente con la firma de todos sus ministros, declarar turbado el orden público y en Estado de Sitio toda la República o parte de ella. Mediante tal declaración el Gobierno tendrá, además de las facultades legales, las que la Constitución autoriza para tiempos de guerra o de perturbación del orden público, y las que conforme a las reglas aceptadas por el derecho de gentes, rigen para la guerra entre naciones".

Por otra parte, el ordinal 8 del art. 120 de la Constitución vigente en ese entonces decía: "Corresponde al Presidente de la República como Jefe del Estado y suprema autoridad administrativa, dirigir, cuando lo estime conveniente, las operaciones de guerra como jefe de los ejércitos de la nación". Tuvo razón Betancur cuando dijo: "Yo ordené y la cúpula militar a través del Ministro de Defensa cumplió una orden que yo podía dar...". Hay que tener en cuenta que aquí no se habla de guerra internacional ni de guerra interna; se habla de guerra. El 121 se refiere a ambas situaciones: la interna y la internacional.

En la instrucción en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, el Congresista instructor **Horacio Serpa Uribe** (candidato liberal derrotado a la presidencia en 1998, continuista de Samper) archivó la investigación contra Betancur, descartó la aplicación del Derecho de Gentes para el caso colombiano y calificó de "novedosa y sugestiva" la tesis del Procurador de entonces Carlos Jiménez Gómez. Serpa dijo: "ni el Presidente, ni el Ministro de Defensa cometieron delitos, y actuaron de buena fe al no negociar con el M19". Dijo que la Comisión de Acusaciones de la Cámara no era competente para evaluar el caso bajo la luz del Derecho de Gentes. Curiosamente en 1990 el Procurador Alfonso Gómez Méndez solicitó la destitución del General Arias Cabrales, precisamente por desconocer el Derecho Internacional

Humanitario en la recuperación del Palacio. Tanto Serpa como Alfonso Gómez Méndez (quien fungió como Fiscal General de la Nación) deberían comparecer en calidad inicialmente de testigos y si lo amerita abrir investigación por prevaricato a Serpa Uribe que exculpó a Betancur con criterios acomodaticios.

En todo caso, a los diez años del holocausto el Consejo de Estado había proferido 21 condenas contra la Nación. En ellas se ordenó la indemnización de 132 familiares de las víctimas (Ver El Espectador del 5 de nov/95, p. 8ª). Recalcamos en que dichas condenas corresponden a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por lo tanto sigue impune lo penal.

Para Enrique Rodríguez, Presidente de la Asociación de Familiares Desaparecidos en el Palacio, "Las consecuencias son tremendamente notorias, espantosas para quienes llevamos diez años sin poder saber de los nuestros. Los familiares de los trabajadores de la cafetería del Palacio de Justicia, que desaparecieron en su totalidad, no hemos recibido siquiera el gesto de ser recibidos en una oficina pública, porque se nos señala como enemigos del Estado. Las familias de esos desaparecidos cayeron en desgracia sin que jamás el Estado les diera la mano. La impunidad se sigue paseando y nosotros no tenemos siquiera una tumba a dónde llevar una rosa. Esas son las consecuencias que vivimos los familiares de los desaparecidos. Gente humilde, mujeres de servicio, meseros, que hoy no tienen sus hijos ni siquiera cómo vivir. No han recibido siquiera una sonrisa del Estado. (El Espectador, 5-XI-95, p. 2C.).

Como consecuencia de la toma, se desató una feroz represalia y hostigamiento contra algunos simpatizantes del M19 (sociedad civil no alzada en armas), teniendo muchos de ellos que abandonar el país en circunstancias extremas; tal es el caso de Yolanda Villavicencio Mapy (actual presidente de la Asociación Española de Solidaridad y Cooperación con Colombia AESCO ) y Gustavo Fajardo Celis, quienes residen en Madrid.

Para la fecha del magnicidio, el Brigadier General José Luis Vargas Villegas era el Comandante del Departamento de Policía de Bogotá, por lo cual también debe procesarse al dirigir los operativos conjuntamente.

Sería importante rescatar los testimonios del teniente José Vicente Uribe, herido en la refriega; del Magistrado Reinaldo Arciniegas Baedecker, liberado para negociar el día 7. También del Magistrado Julio César Uribe Acosta, quien salió vivo.

Sobre una eventual responsabilidad del M19, la verdad es que todos fueron muertos y otros desaparecidos, por lo cual lo único a investigar podría ser la autoría o complicidad del Mando Central, del cual hacía parte Antonio Navarro Wolff, aunque él ha dicho que se opuso a la toma.

Es pertinente traer a la causa abierta las declaraciones del Magistrado Humberto Murcia Ballén, la del Ministro de Justicia Enrique Parejo, la del Ministro de Gobierno Jaime Castro, quien dijo que la acción armada comenzó sin aguardar la orden civil, para "lavar" su imagen y salvar la responsabilidad del Ejecutivo Central. De Miguel Vega Uribe, quien dijo en el Parlamento que nada había que negociar con los

guerrilleros.

Lo curioso es que con la contratoma se destruyeron 1.200 casos de acusaciones al Ejército por torturas (provenientes la mayoría de las épocas de López y Turbay) y sólo 4 o 5 casos de extradición, por lo cual se confirma una maniobra dolosa del militarismo.

El testimonio de Reyes Echandía fue premonitorio: "Estamos en trance de muerte. Tienen que pedirle al Gobierno que cese el fuego. Rogarle al Ejército y a la Policía que se detengan. (El País, 8-XI-85, p. 2). Reyes informó a la radio que si el Gobierno no ordenaba el cese del fuego "habrá una hecatombe". (Ibídem).

Reyes era muy amigo de Roberto Bergalli, profesor Titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, criminólogo que conoce secretos del caso. Igualmente, Asonal judicial se pronunció con un paro de jueces. Antonio Suárez -su presidente actual- tuvo que refugiarse en España por amenazas.

El Presidente de Asonal Judicial de entonces, Magistrado Jaime Pardo Leal -asesinado luego-, expresó: "Los militares y policías tuvieron un comportamiento mucho peor que el de los guerrilleros" (Diario 16, 12-XI-85, p. 16). El propio Pardo dijo que en el Palacio estaban los expedientes por torturas y desapariciones, sobre todo contra el Ministro y General Miguel Vega Uribe, responsabilizado por el Consejo de Estado de las torturas y otras violaciones de los Derechos Humanos contra varias personas y en especial contra una joven médica (Olga López) a quien acusaron de ser miembro del M19.

La declaración de la magistrada Aidé Anzola demuestra que los guerrilleros no asesinaron a los magistrados, sino que fueron víctimas del fuego militar gubernamental.

Mucho sabe la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares, que tuvo varios procesos en curso, algunos ya fallados, contra los militares que incurrieron en estos desmanes.

Sin embargo, la Comisión II del Senado, en contubernio con el Gobierno, ascendió y condecoró a numerosos militares asesinos.

El General Vega Uribe dijo después de la contratoma: "La actitud del ejército ha dejado fortalecida la democracia".

Belisario Betancur creó un Tribunal Especial de Investigación que exoneró a la Rama Ejecutiva del Poder Público; debe imputarse como prevaricador. El Informe de la Procuraduría inicial fue vacilante, no contundente, y la Comisión de Acusaciones de la Cámara no inició siquiera la investigación, por culpa del político Horacio Serpa Uribe.

El Coronel Alfonso Plazas Vega, Comandante de la Escuela de Artillería, dirigió el operativo. Posteriormente se lanzó al Senado. Hoy por fin está condenado, pero disfrutando de los beneficios del casino de oficiales.

Es insustancial el argumento del retiro de la seguridad del Palacio de Justicia para la

época de la toma, frente al genocidio efectuado por la tropa.

El Ejército dice que "rescató" a 215 personas, lo cual no es cierto, pues varias desaparecieron.

El Cabo 2° del Ejército José Domingo Bohórquez dijo: "Portaba un fusil Galil con 40 tiros, pero la verdad es que no sabía a quien dispararle por lo oscuro y difícil de la situación".

En su declaración al Ministerio Público, el Presidente Betancur afirmó que sí dirigió y es responsable del manejo político de la contratoma del Palacio, pero que la parte logística, militar, de armamento, la dirigieron el Comandante del Ejército y el Comandante de la Policía. Aunque él lo niega, su hermano Jaime Betancur dijo que sí habló con el Presidente cuando estaba cautivo como rehén y que luego salió libre.

Es vital el testimonio de Alvaro Villegas Moreno, Presidente del Senado, quien afirmó que Belisario Betancur se rehusó a negociar: "quiero decirle sólo a Ud. que no voy a negociar", una vez fueron consultados los expresidentes (también genocidas como él) y los candidatos presidenciales.

Es indudable que el Ejército fue el culpable del incendio, pues hay un peritazgo científico sobre los cohetes roquets y del cohete AT-MT-242 que desprende una ola de calor de entre 800 y 1000 grados centígrados, con el agravante de que los militares no dejaron entrar a los bomberos a apagar el fuego.

El levantamiento de cadáveres lo hicieron los propios militares, por orden del Brigadier General José Luis Vargas Villegas y el Alcalde de Bogotá, ya fallecido, Hisnardo Ardila.

El soldado de artillería José Yesid Cardona, quien estuvo en los operativos, dijo que varios de los "rescatados" salieron vivos hacia la Casa del Florero, cuartel temporal de los militares desde donde coordinaban las acciones y las desapariciones. El celador de dicha casa identificó a Irma Franco como la persona sacada en un Nissan Patrol verde cabinado por varios detectives y desaparecida hasta hoy día.

Se violó la Conferencia Diplomática de Ginebra del 12 de agosto de 1949, aprobada por la Ley 5 de 1960 en Colombia, en especial el Convenio relativo al trato de prisioneros de guerra y a la protección de las personas civiles. Se violó el Derecho de Gentes y el Derecho Internacional Público.

El 20 de junio de 1986 el Procurador General de la Nación Carlos Jiménez Gómez denunció ante la Cámara de Representantes a Belisario Betancur y a su Ministro de Defensa Miguel Vega Uribe "por su acción y/u omisión en relación con el personal civil, rehenes o no, atrapado y no evacuado en las instalaciones del Palacio de Justicia los días 6 y 7 de noviembre de 1985, como consecuencia y en desarrollo de la ocupación violenta de dicha edificación por el movimiento guerrillero M19 y durante el combate librado para su recuperación. (Ver: Procuraduría General de la Nación. "El Palacio de Justicia y el Derecho de Gentes". Ed. Printer, 1986, p. 31.).

La tesis central del Procurador es que la toma del Palacio de Justicia fue un acto de guerra durante el cual no se hizo lo debido para rescatar a los terceros inocentes. Dice, entre otras cosas: "El Derecho de Gentes tiene principal y originariamente carácter consuetudinario, no escrito, y se basa en los valores jurídicos y sentimiento humanitarios de los pueblos civilizados y en la práctica que ellos han ido generando a lo largo de la historia. Todos estos comparten el deber de respeto a la vida e integridad personal de los presos de guerra y de los heridos y enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña, tanto como los rehenes enemigos en poder propio, lo que, a mayor abundamiento, debe aplicarse a la consideración por los rehenes propios en poder del enemigo y, en general, a los derechos de la población no combatiente en el curso de conflictos armados (Ibid. p. 28). Como hemos dicho, la denuncia del Procurador no tuvo el respaldo esperado, pues el Juez 30 de Instrucción Criminal, a quien le correspondió calificar los hechos de la toma y contratoma del Palacio de Justicia, en auto del 31 de enero de 1989, dejó una constancia procesal según la cual tanto el M19 con las Fuerzas Armadas violaron ostensiblemente el DIH, el primero en razón de la aprehensión y toma de rehenes, y el segundo a causa del irrespeto a la vida de los terceros inocentes. Entendió (erróneamente) que hubo, pues, un "empate militar" no punible.

La única sanción efectiva sobre los hechos del Palacio de Justicia fue la Resolución 404 del 28 de septiembre de 1990 del Procurador Delegado para las Fuerzas Militares José Plinio Moreno Rodríguez, confirmada por el Procurador General de la nación de entonces Carlos Gustavo Arrieta Padilla, quien sancionó disciplinariamente con solicitud de destitución -desvinculación definitiva de las Fuerzas Militares- al general Jesús Armando Arias Cabrales en su condición de Comandante de la XIII Brigada del Ejército Nacional para la época de los hechos de la toma del Palacio de Justicia, porque siendo el oficial bajo cuya responsabilidad se llevó a cabo la operación militar, no tomó las medidas necesarias tendientes a proteger la vida de los rehenes indefensos, ajenos al conflicto, sobreponiendo su seguridad física al sometimiento del grupo guerrillero, violando entre otras la Ley 5 de 1960 que incorporó al derecho colombiano las normas del DIH, en particular el art. 3 común que precisa la inexcusable obligatoriedad de respetar y proteger la vida y la integridad corporal de las personas ajenas a un conflicto armado sin carácter internacional". Dice entre otras cosas que "la ofensiva demostrada por el Ejército no podía tener como objeto la protección de los rehenes sino, por el contrario, afianzar la capacidad de ataque de las Fuerzas Armadas". (Ib. p. 23).

## EL FALLO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

En noviembre de 2014 se produce un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el cual se condena a Colombia por desaparición forzada de 12 personas, principalmente trabajadores, de la cafetería del Palacio de Justicia, incluyendo al Magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, de quien se sabe que salió del Palacio vivo (por videos) y luego fue llevado muerto al Palacio.

Fierenstain introduce el concepto de genocidio político como forma de reconfiguración el espectro político en una región, haciendo el paralelo entre el

holocausto nazi y la dictadura argentina. En este caso, la Fuerza Pública presente en la retoma del palacio de Justicia con operaciones como “rastrillo” pensaban que liquidando los guerrilleros del Palacio de justicia eliminaban un foco “subversivo” para siempre, sobre la base de que eran “indeseables” y “contrarios a la moral católica y democrática imperante”. En esta forma surge un imaginario consistente en creer que “muerta la perra se acabó la rabia”. Cuán equivocados estaban! La presencia electoral de exmilitantes del M19 en el Congreso y hasta en la Alcaldía de Bogotá demostró su grave yerro. Se trata de reconfigurar un modelo político excluyente y hegemónico, que no permita la cabida de nuevas fuerzas o propuestas en el escenario nacional, recurriendo a su eliminación de carácter genocida para exterminarlas.

La conclusión es que 29 años después del genocidio ocurrido como consecuencia de la acción violenta del Estado, le ha correspondido a la Corte Interamericana de DDHH el papel de haber impartido justicia ante la inoperancia del estado colombiano, condenándolo.

## ALTERIDADE E DIREITOS HUMANOS: DA NECESSIDADE DE UM NOVO FUNDAMENTO TEÓRICO

Rodrigo Alvarenga  
PUC-PR

### Resumo:

Considerando a falta de efetividade das políticas públicas para consolidação dos direitos humanos, bem como sua fragilidade perante a opinião pública, o presente estudo pretende analisar o sentido da insuficiência dos sistemas protetivos em relação aos direitos dos povos indígenas, por meio da análise do fundamento dos direitos humanos. Ao estabelecer os limites de uma concepção normativa, de matriz liberal e eurocêntrica, fundada em pressupostos racionais e pretensamente universais da natureza humana, pretende-se evidenciar a necessidade de incluir o princípio da alteridade nas discussões sobre a fundamentação. A perpetuação do genocídio indígena em nome do progresso e o preconceito enraizado na sociedade brasileira quanto aos povos originários estão relacionados a sua inadequação para com os princípios civilizatórios que caracterizam o mundo ocidental, tais como a igualdade, a liberdade ou a dignidade da pessoa humana. Dessa forma, uma ética que possa fundamentar os direitos humanos já não pode ser pensada apenas com base na lógica da identidade, orientada pela concepção de natureza humana de uma determinada civilização, mas necessita considerar a transcendência radical de outrem.

**Palavras-chave:** alteridade; direitos humanos; eurocentrismo.

### INTRODUÇÃO

Desde o século XVIII, quando os direitos humanos se afirmaram como uma prerrogativa internacional, verifica-se um esforço vão para viabilizá-los, o que não significa a negação de alguns avanços, mas o reconhecimento de que algo pode estar impedindo sua real efetivação, visto que os países alcançaram um certo consenso na matéria e dificilmente uma nação se levantará contra a Declaração Universal dos Direitos Humanos. De qualquer forma, não são raras suas violações no Brasil, não apenas no que diz respeito ao absurdo da violência cotidiana nos grandes centros urbanos, mas violações geradas pela própria estrutura de poder da sociedade civil e que tem no Estado o seu principal responsável. Trata-se de um paradigma de governo que apresenta tendência política de fazer valer cada vez mais ações que seriam típicas de um Estado de exceção<sup>1</sup>, reduzindo as liberdades

<sup>1</sup> Embora Agamben (2004, p.12) admita a dificuldade de definição do Estado de exceção, uma vez que ele se caracteriza pelo paradoxo de ser capaz de suspender o ordenamento jurídico sem fazer parte dele e, ainda, de incluir o vivente pela própria suspensão de direitos. “Na verdade, o estado de exceção não é nem exterior nem interior ao ordenamento jurídico e o problema de sua definição diz respeito a um patamar, ou a uma zona de



individuais e enfraquecendo os pressupostos fundamentais do Estado de Direito, exatamente o que ocorreu na Alemanha nazista e que caracteriza os regimes totalitários.

De acordo com Agamben (2004, p. 13), “a criação voluntária de um estado de emergência permanente (ainda que, eventualmente, não declarado no sentido técnico) tornou-se uma das práticas essenciais dos Estados contemporâneos, inclusive dos chamados democráticos”. Dessa maneira, uma medida de caráter provisório e excepcional, em que inimigos políticos ou qualquer cidadão em discordância com um determinado projeto de nação são simplesmente eliminados, tornou-se uma técnica de governo. Para citar um caso típico da atualidade que ilustra essa tendência descrita por Agamben, evidencia-se no cenário nacional o que pode ser chamado de retomada da ofensiva contra os povos indígenas, sob a lógica da necessidade de alimentos e fornecimento de energia para a população brasileira. É claro que não existe nenhuma prática autorizada pelo governo de massacre dos povos indígenas, mas não seria ingenuidade ignorar que o apoio irrestrito ao agronegócio e a construção de hidroelétricas em plena selva amazônica sob a lógica do progresso levariam ao recrudescimento dos conflitos e à morte de centenas de inocentes.

Nesse sentido, é possível dizer que a vida do indígena no contexto da sociedade brasileira pode ser pensada com base no conceito de *homo Sacer*<sup>2</sup>, utilizado por Agamben, para descrever a estranha capacidade do poder soberano de declarar alguém um ser, ao mesmo tempo, matável, porém, não sacrificável, transformando-o em vida nua, uma vida que não tem relevância nenhuma para a manutenção do poder pelo sistema dominante. Isso não significa que o indígena tenha sido banido de uma comunidade política pela prática de um delito e perdido seus direitos constitucionais, na verdade, ele nunca fez parte efetiva do ordenamento jurídico. O indígena não é declarado pelo poder soberano como *homo Sacer*, não é, portanto, de direito, mas acaba sendo de fato, visto serem eles constantemente submetidos a diferentes formas de violência, praticamente como cidadãos sem direitos.

O que chama a atenção é o fato do Brasil ser considerado um país democrático, defensor das premissas básicas da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que tem na Constituição Federal uma série de direitos garantidos por lei, mas mantém uma imensa população em uma condição de existência que se assemelha àquela do *homo Sacer*. Na prática, a vida do indígena brasileiro tem pouco valor e se qualquer um quiser matá-lo, dificilmente será punido, e não se vê

---

indiferença, em que dentro e fora não se excluem mas se indeterminam. A suspensão da norma não significa sua abolição e a zona de anomia por ela instaurada não é (ou, pelo menos, não pretende ser) destituída de relação com a ordem jurídica” (AGAMBEN, 2004, p. 39).

<sup>2</sup> O conceito de *homo Sacer* de Giorgio Agamben remete a uma figura do antigo direito romano que caracterizava aquele indivíduo que era banido do ordenamento jurídico, mas permanecia incluído de alguma forma, na medida em que seu sacrifício era proibido, mas qualquer um que o matasse não cometia delito. Como explica Agamben (2002, p. 88), trata-se de “uma Figura enigmática do direito romano arcaico, que parece reunir em si traços contraditórios e por isso precisava ela mesma ser explicada, entra assim em ressonância com a categoria religiosa do sagrado no momento em que esta atravessa por conta própria um processo de irrevogável dessemantização que a leva a assumir significados opostos; esta ambivalência, posta em relação com a noção etnográfica de tabu, é usada por sua vez para explicar, com perfeita circularidade, a Figura do *homo sacer*.” Para fins de esclarecimento, considera-se importante informar que não há neste trabalho a intenção de explorar de forma aprofundada a aplicabilidade do conceito de *homo sacer*, para compreensão da dramática situação dos indígenas no Brasil, isto deverá ser melhor explorado em outro trabalho.

nenhum grande movimento de conscientização da sociedade civil sobre essa questão. Existe, na verdade, uma espécie de cumplicidade ou, pelo menos, uma inexplicável omissão da opinião pública brasileira e dos meios de comunicação de massa sobre essa situação. Mesmo no que se pesquisa e se discute no campo dos direitos humanos não encontra-se uma grande preocupação com um dos fenômenos que mais deveria causar vergonha aos brasileiros, a saber, a perpetuação do genocídio indígena.

Ao que se deve esta indiferença, cumplicidade ou impunidade com relação aos crimes praticados contra as populações indígenas? O que está por trás desse fenômeno, que insiste em transformá-los em vida nua, de uma forma que nem os direitos humanos são capazes de intervir com efetividade? A análise que se pretende partirá de uma suspeita que se levanta sobre o problema do fundamento dos direitos humanos, que, em sua pretensão de universalidade, acabou impondo determinados padrões civilizatórios que fazem com que alguns sejam considerados, na prática, mais humanos que outros, mais cidadãos que outros. Trata-se de questões que não podem ser simplesmente reduzidas a dificuldades técnicas e práticas de garantia de direitos, como se a investigação dos fundamentos desses direitos fosse considerada secundária frente às necessidades de concretização.

Embora se reconheça a validade da crítica elaborada por Norberto Bobbio (2004, p. 13) sobre a ausência de sentido de uma investigação do fundamento absoluto dos direitos humanos, faz-se necessário discordar da seguinte afirmação: “o problema fundamental em relação aos direitos do homem, hoje, não é tanto o de justificá-los, mas o de protegê-los. Trata-se de um problema não filosófico, mas político” (BOBBIO, 2004, p. 16). Evidentemente que as disputas nas esferas política e judiciária com relação à proteção e à garantia dos direitos humanos são uma frente de atuação extremamente necessária, contudo, isso não pode significar um valor secundário para a questão da fundamentação. O que se pretende analisar neste artigo é justamente o problema da ineficácia de um fundamento pretensamente universal dos direitos humanos e sua parcela de responsabilidade nas violações relacionadas aos direitos dos povos indígenas no Brasil.

Dessa forma, a resposta que se pretende dar ao problema da inexistência ou consequências do fundamento universal e absoluto é diferente da estratégia de Bobbio, no sentido de focar na concretização dos direitos humanos, pois, na medida em que toda ação possui o seu fundamento, corre-se o risco de se perpetuar numa prática elitista de garantia de direitos que visa manter a opressão por meio de um discurso humanitário. Nesse sentido, uma investigação radical do fundamento dos direitos humanos pode ajudar a compreender o ponto cego das políticas de concretização e, desse modo, favorecer o desenvolvimento de uma outra perspectiva ético-política. Uma perspectiva que possa considerar os limites dos pressupostos modernos e iluministas que fundam os direitos humanos. Do contrário, os direitos humanos continuarão sendo um modo de garantir e legitimar direitos individuais a quem já faz parte efetivamente do sistema de garantia de direitos e que detém uma condição privilegiada na sociedade, mantendo, não apenas uma parcela considerável de pessoas à margem, como legitimando uma forma camuflada de violência.

## 1. RACIONALISMO E UNIVERSALISMO: A CONCEPÇÃO LIBERAL DOS DIREITOS HUMANOS

O ponto de partida desta investigação é de que a dificuldade de efetivação dos direitos humanos está relacionada à própria estrutura de pensamento que os procurou legitimar, qual seja, aquela pautada na noção de indivíduo que caracterizou o período moderno e toda a cultura ocidental. Sua consequência são abordagens liberal e etnocêntrica dos direitos humanos, que são incapazes de pensar e admitir a diferença na sua radicalidade, muito menos proteger e assegurar direitos àqueles que não são ocidentais, modernos ou racionais. O pensamento moderno está fundado na perspectiva do ego *cogito* cartesiano e se caracteriza pela dicotomia entre consciência e natureza, bem como pela primazia do Eu em detrimento de outrem.

O pensamento objetivo, ao procurar explicar o fenômeno no âmbito de uma subjetividade constituinte, como o fez o idealismo cartesiano, tornou praticamente irrealizável a percepção do outro. Na perspectiva de um *cogito* constituinte que considera o mundo a partir de uma transcendência redutível, e que possui a ilusão de um saber verdadeiro e definitivo acerca do fenômeno, o outro é apenas mais um objeto constituído pela consciência. O exemplo da percepção do pedaço de cera utilizado por Descartes (1948, p. 79-80) na segunda *Meditação* demonstra a soberania do pensamento quando defende que seu reconhecimento após o derretimento não ocorre por meio de suas qualidades sensíveis, mas em função de um juízo.

É apenas uma inspeção criteriosa do espírito em sua capacidade de julgar e distinguir clara e distintamente a verdade do erro, que reconhecerá a cera derretida como ainda sendo ela mesma. Não se trata da visão propriamente dita, mas sim do *pensamento de ver* que rejeita ao sensível a possibilidade de oferecer qualquer informação sobre a essência. A verdade sobre o mundo é fruto de uma representação mental, de um Eu que tem sua potência naturante fundada na existência de Deus e na regra da clareza e da distinção. Inclusive a verdade no que se refere à percepção do outro, visto que a mesma lógica aplica-se a todas as coisas que se situam fora do Eu. Por exemplo, no que diz respeito à capacidade de um observador de diferenciar, do alto da janela de um grande edifício, as pessoas que estão sendo observadas de simples bonecos, com casacos e chapéus, a se movimentar por meio de molas. Segundo Descartes (1948, p. 80), “julgo que são homens verdadeiros e assim compreendo, somente pelo poder de julgar que reside em meu espírito, aquilo que acreditava ver com meus olhos”. Seja o reconhecimento do pedaço de cera, apesar das mudanças ou alterações sofridas, ou o julgamento relativo às pessoas vistas do alto de um prédio, é apenas o entendimento que os concebe.

O que se evidencia em Descartes é um tipo de idealismo que, apoiado na noção de um *cogito* constituinte, que tem o sentido de uma instância racional pura, acredita ser capaz de distinguir a verdade do erro por uma espécie de visão de sobrevoos. O problema, então, e o que interessa em trazer Descartes para a discussão, é a impossibilidade de pensar outrem a partir de uma perspectiva idealista. Ao mesmo tempo em que, de um lado, a partir do pensamento cartesiano, torna-se possível o desenvolvimento do conhecimento, na medida em que se estruturam o paradigma mecanicista e as bases do método científico, por outro lado, instaura-se um impasse diante de outrem.

A função primordial do *cogito* constituinte é reduzir toda a realidade a objetos

de conhecimento para a razão. A questão é que a civilização ocidental herdou de alguma forma a estrutura cartesiana de pensamento, pela qual a humanidade é constituída de vários indivíduos pensantes, com a capacidade de conhecer de modo *a priori*. Dessa forma, não foi por acaso que se constituiu uma concepção de direitos humanos racionalista, que, na sua pretensão de universalidade, definiu uma determinada concepção de natureza humana para fundamentá-los.

O contratualismo de John Locke supõe que todo ser humano já nasce com determinados direitos que seriam, portanto, naturais, no caso, o direito à vida, a liberdade e a propriedade. Embora seja reconhecida a importância dessa tese de John Locke para a consolidação da ideia de direitos humanos, na medida em que ela recusa o direito paternal ou divino do soberano, por exemplo, interessa perceber os prejuízos que a concepção de direitos naturais legaram para a maneira como os direitos humanos são concebidos pelo mundo ocidental. De acordo com Gallardo (2014, p. 199), seria letal para os direitos humanos buscar fundamentá-los no jusnaturalismo de John Locke, isso porque a fundamentação filosófica liberal “faculta a institucionalização de formas particularizadas e excludentes para sua defesa, mas, por isso mesmo, potencia também sua violação sistemática” (GALLARDO, 2014, p. 201).

O que chama a atenção de Gallardo não é exatamente a ideia de que existem certos direitos naturais e universais, mas o que, segundo Locke, é lícito fazer para defendê-los ou garanti-los. O direito à defesa e à pena de morte se transforma numa maneira de garantir o direito de todos à vida e se alguém, por não dominar a faculdade racional e desconhecer a lei natural ousar agir de forma violenta, torna-se obrigação do cidadão de bem, quando da não presença de um representante legal do poder constituído, agir com firmeza e violência em nome do direito de todos.

Para que se possa impedir todos os homens de violar os direitos do outro e de se prejudicar entre si, e para fazer respeitar o direito natural que ordena a paz e a ‘conservação da humanidade’, cabe a cada um, neste estado, assegurar a “execução” da lei da natureza, o que implica que cada um esteja habilitado a punir aqueles que a transgridem com penas suficientes para punir as violações (LOCKE, 1994, p. 85).

Esse posicionamento de Locke se justificaria em função da necessidade de dar fim ao estado guerra, pois o Estado teria a função primordial de se constituir como uma autoridade legal para punir aqueles que não são capazes de compreender o sentido dos direitos naturais, principalmente do direito à propriedade. Surge uma maneira de lidar com a violência que caracteriza o estado de guerra pela utilização do mesmo recurso, a fim de coibir a violação dos direitos relacionados ao próprio corpo do indivíduo burguês e do que ele produz e se apropria pelo trabalho.

Sob a ótica dos direitos humanos, percebe-se surgir um tipo de concepção que legitima a necessidade de agir de forma violenta em nome da proteção dos direitos daqueles cidadãos que honram o contrato social e sabem agir de forma racional, desenvolvendo e ampliando seu patrimônio pelo trabalho. Para Gallardo, embora se esteja tratando de um autor do século XVIII, esse tipo de fundamentação dos direitos humanos é o que está por detrás das ações de caráter preventivo por

parte do Estado. “O imaginário de Locke contém todos os fatores que animam a ideologicamente conservadora e historicamente reacionária *guerra preventiva e eterna* da atual administração estadunidense” (GALLARDO, 2014, p. 205), política de autopreservação que se ampliará absurdamente após os assassinatos dos jornalistas franceses do Charlie Hebdo, em Paris.

As consequências da fundamentação dos direitos humanos em filosofias liberais, como a de John Locke, ainda possuem outras características, por exemplo, a maneira de ver e desenvolver políticas públicas para a população que não se enquadra na perspectiva das teses do direito natural, ou seja, os pobres, mendigos e indígenas, visto que tais grupos de pessoas apresentariam uma espécie de falha na sua condição humana. Afinal, trata-se de pessoas que demonstram não reconhecer a naturalidade dos direitos naturais, na medida em que supostamente desprezam o trabalho e a acumulação de riqueza, isso por não estarem perfeitamente de posse de suas faculdades racionais, o que as torna uma constante ameaça ao patrimônio público privado e à paz do Estado. Dessa forma, é preciso compreender que os direitos humanos, na perspectiva de John Locke, ainda que se fundamentem na ideia de natureza humana, são direitos que podem ser perdidos. “Ter a titularidade humana é, portanto, algo que pode ser perdido. Direitos humanos se apresentam aqui como politicamente reversíveis” (GALLARDO, 2014, p. 208).

Na *Carta Sobre a tolerância*, na qual Locke procura defender a tolerância a respeito das opiniões divergentes acerca dos assuntos religiosos, também se destaca a postura de defesa de direitos para quem se adequa a determinados pressupostos teóricos universais, excluindo, assim, aqueles que não se moldam a uma concepção predeterminada de natureza humana universal. A contradição óbvia está na ideia de que os ateus não devem ser tolerados, por exemplo (LOCKE, 1973, p. 29), porém, a questão que interessa é essa capacidade de certos indivíduos violarem o direito natural de outrem, por sua incapacidade deliberada de trabalhar, formando uma espécie de grupo de pessoas que não são mais dignas de direitos. Conforme consta em sua *Carta sobre a tolerância*, Locke (1973, p. 27) considera que os homens são tão desonestos que a maioria prefere usufruir do trabalho dos outros em vez de trabalhar para adquirir seu próprio sustento, restando aos homens de bem se associar numa comunidade política a fim de proteger sua vida e propriedade desse grande grupo de degenerados.

Com esta breve análise da fundamentação dos direitos humanos na perspectiva de John Locke já é possível perceber que não se trata de uma perspectiva razoável de garantia de direitos a todas as pessoas. Está claro que se trata de um tipo de fundamentação que elege os detentores de direitos conforme sua capacidade para agir racionalmente e produzir riqueza, visto que tal atitude beneficiaria a todos, portanto, direitos humanos aqui estão relacionados principalmente a garantir o direito à propriedade e punir qualquer tipo de ameaça a ele.

Ao fazer fundar a concepção da sociabilidade em uma moral ‘natural’, ou seja, fechada, esta permite imaginar o outro, o diferente (meramente constatado, não explicado) como *abjeto*, que deve ser reprimido, liquidado ou reeducado. A figura colombiana do ‘descartável’, uma expressão dos paramilitares que se refere a

quem deve ser eliminado para que se resplandeçam a verdade, o bem moral e a beleza, possui antecedentes no século XVII. É o 'fraco', sem propriedade nem vontade de trabalho, descoberto por Locke (GALLARDO, 2014, p. 217).

Embora seja possível defender a ideia de que muito se avançou nos últimos séculos e que as teses de Locke não são mais fundantes da sociedade ocidental, muito menos no que diz respeito aos direitos humanos, o que se evidencia na prática é a atualidade do seu pensamento, que pode não ser mais utilizada para fundamentar os direitos humanos, mas que, na prática, se perpetua nas entrelinhas dos discursos abstratos. O que dizer, por exemplo, da comoção internacional e do grande palco armado em Paris, com o cortejo que uniu dezenas de chefes de Estado para lamentar e protestar contra as mortes dos dezessete cidadãos franceses pelas mãos de radicais islâmicos, quando, na Nigéria, durante o mesmo período, um outro atentado dizimou duas mil pessoas? O que explica o grande jogo de cena da mídia internacional na reafirmação do princípio ocidental da liberdade de expressão e o silêncio estupefaciente sobre a população massacrada na Nigéria, senão o fato de que na prática algumas vidas valem mais do que outras?

As vidas que valem mais, é óbvio, são aquelas que representam melhor o imaginário coletivo quanto à natureza humana racional e à capacidade para gerar emprego, renda e riqueza, ou seja, "alguns desses indivíduos acabam sendo mais 'naturalmente' humanos: os proprietários. É a estes que o Estado e o governo pertencem. Eles dão caráter aos direitos fundamentais" (GALLARDO, 2014, p. 220). É justamente sobre essa perspectiva que é preciso analisar o atual conflito de terras no Brasil e a perpetuação do genocídio indígena, afinal, sob a lógica do fundamento que até hoje garante a ineficácia dos direitos humanos para essas minorias, a vida de um cidadão indígena vale muito pouco.

Direitos fundamentais para essa população praticamente não valem nada, ainda que estejam assegurados pela constituição de 1988. E o grande problema que se evidencia na atualidade é um esforço para diminuir direitos das comunidades tradicionais para ampliar os direitos dos proprietários, tudo isso com um discurso polido que condiz com o Estado democrático de direito e que aparenta não atentar contra os direitos humanos, mas oculta um estado de violência absurdo. Um processo que teve início com a conquista da América e a fundação da modernidade e se estabeleceu ideologicamente pela lógica da emancipação iluminista.

## 2. A CONQUISTA DA AMÉRICA E A NEGAÇÃO DA ALTERIDADE

Desde a invasão e a dominação da América do Sul pelos países europeus ficou evidente que o discurso que se constituiu na modernidade, marcado principalmente pelo mecanicismo cartesiano e pelo liberalismo de John Locke, não visava difundir valores universais que realmente pudessem ser estendidos a todos os seres humanos. Tratava-se, na verdade, de valores que tinham como ponto de partida uma concepção de natureza humana que condizia, por excelência com o perfil do colonizador, o homem branco dominante da racionalidade, das técnicas de produção e do poder bélico, tudo isso amparado pela suposição de uma humanidade conforme os desígnios de Deus. Daí a dificuldade de reconhecimento dos povos indígenas como sendo seres humanos legítimos, visto que os nativos

extrapolavam as matrizes teóricas antropológicas dos colonizadores. Por consequência da visão que o eu fez do outro desconhecido, somou-se uma série de horrores durante o processo de invasão e de colonização que, infelizmente, está longe de ter fim, mesmo nos dias atuais, pois, como se procurará explicar, o eurocentrismo continua fazendo suas vítimas no campo de forma tão bárbara quanto antigamente.

Em *A conquista da américa*, Todorov destaca algumas passagens que denunciavam de que lado se encontrava a barbárie no choque de civilizações. Já em 1516, um grupo de dominicanos endereçou uma carta ao ministro do imperador Carlos I, da Espanha, a fim de narrar algumas atitudes grotescas que ocorreram, como no caso da forma como algumas crianças eram tratadas:

Alguns cristãos encontraram uma índia, que trazia nos braços uma criança que estava amamentando; e, como o cão que os acompanhava tinha fome, arrancaram a criança dos braços da mãe e, viva, jogaram-na ao cão, que se pôs a despedaçá-la diante da mãe. (...). Quando havia entre os prisioneiros mulheres recém-paridas, por poucos que os recém-nascidos chorassem pegávamos pelas pernas e matávamos-nos contra as rochas ou jogávamos-nos no mato para que acabassem de morrer (TODOROV, 2003, p. 202).

Ainda em uma outra passagem sobre as relações dos colonizadores com os escravos das minas:

Todos (os contramestres das minas) estavam acostumados a dormir com as índias que dependiam deles, se lhes agradassem, fossem casadas ou solteiras. Enquanto o contramestre ficava na cabana ou choça com a índia, mandava o marido extrair ouro das minas; e a noite, quando o infeliz voltava, não somente cobria-o de golpes ou chicoteava-o por não ter trazido a quantidade suficiente de ouro, como também, muito frequentemente, amarrava seus pés e mãos e jogava-o para baixo da cama como um cão, antes de deitar-se, bem acima, com sua mulher (TODOROV, 2003, p. 202).

Ao ler esses relatos e vários outros apresentados por Todorov, além da perplexidade diante de fatos tão absurdos e do profundo pesar pelo sofrimento ao qual foram submetidos esses povos, fica a pergunta pela explicação de tal comportamento. Para Todorov (2003, p. 206), há uma tendência em acreditar que tudo não se tratou da velha e sempre presente, ao longo da história da humanidade, febre do ouro, ou seja, a ganância e o desejo de enriquecer fizeram com que tudo e todos fossem tratados apenas como meios para atingir o objetivo de ficar rico, contudo, os relatos acima fazem pensar sobre outras motivações que podem estar relacionadas à própria modernidade. “A ‘barbárie’ dos espanhóis nada tem de atávico, ou de animal; é bem humana, e anuncia a chegada dos tempos modernos” (TODOROV, 2003, p. 209).

Ao comparar a prática do sacrifício dos nativos com os massacres praticados pelos espanhóis, Todorov (2003, p. 207-208) demonstra a existência de uma profunda diferença entre o que ele chamou de sociedade de sacrifício e sociedade de massacre. No caso do sacrifício, estão presentes vários elementos que sugerem uma função social para o ato, não sendo, portanto, algo individual praticado a

esmo, enquanto o massacre parece ser justamente o contrário. “Longe do poder central, longe da lei real, todos os interditos caem; o liame social, já folgado, arrebenta, para revelar, não uma natureza primitiva, o animal adormecido em cada um de nós, mas um ser moderno, aliás cheio de futuro, que não conserva moral alguma, e mata porquê e quando isso lhe dá prazer” (TODOROV, 2003, p. 209).

Parece claro que as características da matança, a forma como o sistema todo estava estruturado, a eficácia do procedimento e a exploração dos corpos para fazer tecido com os cabelos, sabão com a gordura e usar as cinzas para adubar plantações inserem o holocausto como uma invenção moderna. Moderna porque racional, metódica, dogmática e, por consequência, insensível, incapaz de estabelecer uma relação com a alteridade. Na realidade, tratava-se de uma “possibilidade essencial do mal elementar ao qual a boa lógica podia conduzir e do qual a filosofia ocidental não estava suficientemente preparada” (LEVINAS, 2001, p. 21). Por meio de tal lógica, na medida em que ela prescreve uma série de procedimentos racionais em vista de determinados fins, o estranho, o desconhecido, se transforma em um incômodo para a mania moderna de inserir tudo numa perspectiva de totalidade. Conforme os judeus, negros, homossexuais, loucos, indígenas não se encaixam nos moldes estipulados pela razão moderna, a tendência é o surgimento de um desejo obscuro, não apenas de exclusão, mas de completa anulação. Seria melhor que não existissem, pois tratam-se de um erro da natureza, seres inferiores; é preciso, portanto, corrigir o problema.

Como descreve bem Bauman (1998, p. 26), o que mais assusta é encarar de frente a possibilidade de que o holocausto tenha sido mais do que um desvio na rota do progresso, mais do que um tumor canceroso em uma sociedade sadia, não uma antítese da modernidade, mas simplesmente a outra face do processo civilizatório e dos ideais racionais e científicos de desenvolvimento. Tudo dentro de uma certa normalidade que acompanhava o processo de desenvolvimento do mundo ocidental de busca da felicidade e da perfeição, com a certeza inquestionável, não apenas de que elas existem, mas de que já são conhecidas e basta simplesmente chegar lá, a qualquer preço. A experiência do holocausto poderia até ser nova e desconhecida, “mas no sentido de plenamente acompanhar tudo o que sabemos sobre nossa civilização, seu espírito condutor, suas prioridades, sua visão imanente do mundo – e dos caminhos adequados para buscar a felicidade humana e uma sociedade perfeita” (BAUMAN, 1998, p. 27). De certo modo, portanto, o holocausto se associa à cosmovisão moderna de mundo, de Descartes, Locke e tantos outros que legaram o iluminismo para a sociedade ocidental. Claro que isso não significa uma relação direta, causal e linear entre uma coisa e outra, o que seria praticamente uma falácia, mas quer dizer que os parâmetros racionais da civilização moderna, na medida em que são assumidos de forma dogmática, podem dar origem ao monstro incontrolável do totalitarismo, a exclusão e a anulação do outro, da diferença que escapa aos limites da consciência constituinte.

### 3. ALTERIDADE COMO POSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS

A questão do que seria possível chamar de genocídio indígena, desde a



invasão da América até os dias atuais, a ineficiência dos direitos humanos para proteger eles e suas terras dos interesses do capital e do progresso se inserem dentro desse mesmo contexto. O eurocentrismo, que marcou a colonização da América Latina e ainda encontra ressonância no imaginário social dos ideólogos e das massas, é um reflexo desse mesmo processo de recusa da alteridade e autoafirmação dos ideais racionais da civilização moderna. Quando se evidencia na atualidade uma ofensiva contra os povos indígenas, o atraso histórico e planejado na demarcação das suas terras, a forma patética com que o Estado e a sociedade passam por cima de seus direitos em nome de recursos naturais e energia, percebe-se a mesma cosmovisão dominante e idealista de progresso que teve no holocausto seu apogeu. Trata-se, então, da mesma anulação da diferença; o outro, o estranho, o diferente não se encaixa nos ideais de progresso da atual civilização científica e tecnológica, assim, deve desaparecer. Daí a dificuldade de fundamentar os direitos humanos nessas mesmas ideias universalizantes de liberdade, igualdade e de dignidade da pessoa humana, pois, embora existam boas intenções em afirmar direitos naturais, o resultado poderá ser justamente o da anulação da diferença, pois ela sempre escapará em algum sentido desses parâmetros de totalidade elaborados racionalmente.

A perpetuação do genocídio indígena em nome do progresso e o preconceito que esses povos enfrentam no campo e nas cidades ocorrem, em certo sentido, porque eles não se adequam aos ideais civilizatórios que caracterizam o mundo ocidental, não se encaixam no que é entendido como igualdade, liberdade ou dignidade da pessoa humana. Por isso, uma ética que possa fundamentar os direitos humanos já não pode ser pensada com base apenas em princípios de uma determinada civilização, ela precisa levar em consideração que outrem é completamente transcendente, não podendo ser reduzido à lógica do mesmo. No que se refere à questão indígena e ao imaginário coletivo do brasileiro, constituído com base nos parâmetros eurocêntricos e, mais recentemente, norte-americanos de civilização, distorcem com uma série de preconceitos à identidade do outro.

Visto como seres não produtivos, preguiçosos, capazes de atentar contra o princípio da dignidade da vida humana por meio do infanticídio, canibalismo, etc., os indígenas são reduzidos a um objeto de investigação, trata-se de uma perspectiva do ser sobre o não ser pela lógica da totalidade que nega a exterioridade ao sistema. “É a lógica da alienação da exterioridade ou da coisificação da alteridade, do outro homem” (DUSSEL, 19[–], p. 48). É necessário romper com esse processo de redução do outro a esfera do mesmo, para dar lugar a um processo de afirmação da alteridade. No que diz respeito aos direitos humanos, é preciso colocar em questão a sua concepção liberal, a qual historicamente procurou afirmar direitos individuais de uma determinada cultura central em detrimento dos direitos coletivos das culturas periféricas.

O que se observa no Brasil atualmente sobre a ofensiva dos proprietários ruralistas e do Estado brasileiro contra as terras e a vida indígena se inserem dentro desse contexto, pois o que está em disputa é o direito à propriedade pela transformação do trabalho. Características liberais que acabam atentando contra o direito à terra e à vida, contra o direito dos povos indígenas de continuar existindo da mesma forma que seus ancestrais. O que prevalece é a velha lógica da superioridade do colonizador sobre o colonizado.

(...) se não há cultivo ou colheita, nem a ocupação efetiva serve

para gerar direitos; outros usos não valem, essa parte da terra, esse continente da América, ainda que povoado, pode ser considerado desocupado, à disposição do primeiro colono que chegue e se estabeleça. O indígena que não se atenha a esses conceitos, a tal cultura, não tem nenhum direito (CLAVERO, 1994, p. 22).

Para que possa prevalecer em algum momento da história uma concepção de direitos humanos que não caia na armadilha do eurocentrismo e sirva apenas aos interesses dos grupos hegemônicos, será preciso romper, primeiramente, com a lógica da dominação. De nada adiantarão dos tratados e acordos internacionais de proteção e garantia de direitos se não houver uma desconstrução dos discursos que os fundamentam e os fazem uma mera abstração, insuficientes para o combate contra a perpetuação da violência contra os diferentes. “Trata-se de, em nome do núcleo racional e emancipador da modernidade, como ‘saída’ da imaturidade, mas não culpada, (negar o ‘mito sacrificial’, eurocêntrico e desenvolvimentista da própria modernidade” (DUSSEL, 1993, p. 172). Deve-se, portanto, instaurar um processo denominado por Dussel de transmodernidade<sup>3</sup>, a partir do qual se deve negar a negação, o que significa renunciar ao que a estrutura de pensamento central e hegemônica, que se constitui como mito da modernidade, elaborou em termos de conhecimento sobre si mesma e sua periferia.

Ao negar a inocência da ‘Modernidade’ e ao afirmar a Alteridade do ‘Outro’, negado antes como vítima culpada, permite ‘des-cobrir’ pela primeira vez a ‘outra-face’ oculta e essencial à ‘Modernidade’: o mundo periférico colonial, o índio sacrificado, o negro escravizado, a mulher oprimida, a criança e a cultura popular alienadas, etc. (as ‘vítimas’ da ‘Modernidade’) como vítimas de um ato irracional (como contradição do ideal racional da própria ‘Modernidade’) (DUSSEL, 2005, p. 31-32).

Os direitos humanos, sob a ótica da alteridade, violentada pela modernidade, se constituem como uma questão não apenas de luta pelo cumprimento da Constituição Federal e do que orientam as Cortes nacionais e internacionais, mas como um problema ético-político, no sentido de atentar para as estruturas de poder e de exclusão que fazem perpetuar as violações. A superação do atual quadro de violência e injustiça contra os povos indígenas na América Latina depende da desconstrução das estruturas epistemológicas ocultas que fundamentam a concepção liberal dos direitos humanos, as quais negam aos indígenas possibilidades de participação, luta e resistência que não se enquadrem nas perspectivas e leis ocidentais. Daí a necessidade de ressignificação dos direitos humanos, a partir de uma outra estrutura de pensamento, que possa não apenas subsidiar pequenos avanços naquilo que a sociedade acha adequado para a população indígena, mas que contribua efetivamente para sua libertação.

Como sugere Flores (2009, p. 17), os direitos humanos, como a grande

<sup>3</sup> O conceito de transmodernidade, segundo Medeiros (2007, p. 44), “significa, de forma simplificada, aproveitar da modernidade o seu caráter emancipatório, negando, por outro lado, seu caráter transcendental e eurocêntrico; e da pós-modernidade, usar a sua crítica, abstraindo, de outra parte, seu caráter niilista. É agora o momento de pensar o “mundo” a partir de uma realidade exterior, reconhecendo desde o início o centrismo da visão européia, compreendendo que o ‘não-ser’ também é, através de um evidente constatação das diferenças existentes.”

questão do século XXI, precisam ser urgentemente reinventados, pelo rompimento com a concepção proposta pelo liberalismo político e econômico, a qual se constitui como um projeto totalitário da razão capitalista, fundada em ideais individualistas, competitivos e exploratórios. Urge a necessidade de uma concepção crítica dos direitos humanos, que não apenas valorize as diferenças, mas, ainda, se constitua como uma ampliação dos espaços democráticos de luta pela libertação da opressão. “Falar de direitos humanos, é falar da abertura de processos de ‘luta pela dignidade humana’” (FLORES, 2009, p. 21). No que se refere à questão indígena, o acompanhamento da história de um verdadeiro ‘holocausto’, que insiste em não ter fim, impele ao fortalecimento das trincheiras, que bravamente resistem ao processo histórico de opressão, pela desconstrução das ideologias de afirmação de um Eu em detrimento de Outrem.

Conforme seja possível negar a negação dos povos originários latino-americanos por meio de uma inversão epistemológica dos padrões intelectuais eurocêntricos e norte-americanos que submetem sua periferia ao seu próprio sistema de ideias, mais brasileiros poderão se identificar com a causa indígena, pois acordarão para o fato de que eles mesmos padecem sob a égide da opressão e da imposição de um modelo de vida insustentável em todos os sentidos. Nessa ocasião, os direitos humanos passarão a deixar de se confundir simplesmente com a norma jurídica e com os ideais abstratos de universalização, os quais privilegiam perpetuamente os grupos hegemônicos em sua lógica perversa de dominação e extermínio, para dar lugar a um grande processo coletivo de luta pela libertação.

## REFERÊNCIAS:

AGAMBEN, G. (2004). *Estado de exceção*. Tradução: Iraci D. Poleti. São Paulo: Boitempo.

BAUMAN, Z. *Modernidade e holocausto*. (1998). Tradução Marcos Penchel. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.

BOBBIO, N. *A era dos direitos*. (2004) . Tradução Carlos Nelson Coutinho. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier.

CLAVERO, B. (1994). *Derecho indígena y cultura constitucional en América*. México: Siglo XXI.

DUSSEL, E. (2005). Europa, modernidade e eurocentrismo. In: Edgardo Lander (Org.). *A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-americanas*. Buenos Aires: CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, setembro 2005. pp. 55-70.

\_\_\_\_\_. (1993). *1492: O encobrimento do outro: a origem do mito da modernidade*. Conferências de Frankfurt. Tradução de Jaime A. Clasen. Petrópolis: Vozes.

\_\_\_\_\_. (19--). *Filosofia da libertação na América Latina*. Tradução Luiz João Gaio. 2. ed. São Paulo: Loyola, (Coleção Reflexão Latino-Americana)

FLORES, J. H. (2009). *A reinvenção dos direitos humanos*. Tradução: Carlos Roberto Diogo Garcia; Antônio Henrique Graciano Suxberger; Jefferson Aparecido Dias. Florianópolis: Fundação Boiteux.

GALLARDO, H. (2014). *Teoria crítica: matriz e possibilidade de direitos humanos*. Tradução Patrícia Fernandes. São Paulo: Unesp.

LÉVINAS, E. (2001). *Algunas reflexiones sobre la filosofía del hitlerismo*. Buenos Aires: Fonde de Cultura Econômica, 2001.

LOCKE, J. (1973). Carta sobre a tolerância. In: LOCKE, John. *Os pensadores*. São Paulo: Abril Cultural.

\_\_\_\_\_. (1994). *Segundo tratado sobre o governo civil: ensaio sobre a origem, os limites e os fins verdadeiros do governo civil*. Tradução: Magda Lopes e Marisa Lobo da Costa. Petrópolis: Vozes. (Coleção clássicos do pensamento político).

MEDEIROS, A. L. B. (2007). *Direito internacional dos direitos humanos na América latina: uma reflexão filosófica da negação da alteridade*. Rio de Janeiro: Lumen Juris.

TODOROV, T. (2003). *A conquista da América: a questão do outro*. Tradução Beatriz Perrone-Moisés. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes.

## **Juventude e Direitos Humanos: a participação social como forma de resistência ao itinerário penalizador juvenil na periferia de Curitiba-PR**

### **Resumo**

O objetivo da pesquisa é compreender o fenômeno da violência juvenil urbana na periferia de Curitiba por meio do censo populacional juvenil e análise de variáveis relativas à desigualdade econômica, local de moradia, perfil familiar, acesso e permanência escolar, cor da pele e formas de acesso (ou ausência) às políticas públicas. No plano teórico, a pesquisa busca evitar análises simplificadoras e reducionistas, uma vez que diversos estudos apontam a incompletude em definir a pobreza econômica como causa da violência e do crime nas sociedades contemporâneas. Isso não significa, entretanto, ocultar e menosprezar o fato de as pessoas oriundas das classes sociais subalternas constituírem, por assim dizer, o núcleo preferencial da ação cotidiana do sistema de justiça criminal dirigido a jovens e adultos. Como e porque isso ocorre sempre representou e ainda representa um desafio à abordagem sociológica e às demais ciências afins. Por isso, o suporte analítico da pesquisa se filia a concepções teóricas fundamentadas na existência das sociedades classistas cujo modo de produção se constitui a partir das desigualdades materiais, diferenças sociais, agrupamentos ideológicos e profissionais que asseguram a reprodução material e o distanciamento simbólico entre as diferentes classes sociais. Em relação à metodologia da pesquisa empírica, a definição de grupos focais terá grande relevância explicativa à compreensão da visão de mundo dos adolescentes e jovens moradores da Vila Torres assim como a de seus familiares, autoridades e lideranças locais, assim como no sentido de confrontar os dados e informações oficiais com a fala dos sujeitos juvenis inseridos em contextos engendrados de desigualdade, violência e etiquetamento social.

Palavras-chave: Juventude, violência, Direitos Humanos.

## 1. INTRODUÇÃO

A compreensão do fenômeno da violência juvenil urbana na periferia de Curitiba fundamenta-se, do ponto de vista analítico, a concepções teóricas fundamentadas na existência de sociedades classistas, cujo modo de produção material se constitui e se reproduz a partir das desigualdades sociais, agrupamentos ideológico-profissionais e instituições que buscam, por diversos meios, legitimar o distanciamento material e simbólico, incluindo a naturalização da violência física e simbólica junto aos grupos socialmente marginalizados. No campo teórico-analítico juvenil rejeita-se, portanto, todo enfoque sociológico de viés funcionalista que busca definir a juventude como uma etapa da vida marcada por problemas semelhantes de indivíduos pertencentes a uma determinada faixa etária, a qual que lhes dá suporte ao estabelecimento de uma cultura juvenil homogênea em termos de aspirações, projetos de vida e consumo cultural

No tocante à delimitação da pesquisa, as informações estatísticas sobre os jovens e adolescentes moradores do bairro relativas à matrícula nas instituições de ensino, inserção no mercado formal e informal de trabalho, em conflito com a lei, incluindo os que foram autores e vítimas de assassinato, serão acrescentadas pela realização de análise qualitativa. Para tanto, optou-se pela técnica de grupos focais junto aos membros da população local. A opção pela realização da pesquisa focal envolvendo a presença de familiares, técnicos sociais, lideranças locais e os próprios adolescentes e jovens moradores da Vila Torres, além de servir para confrontar as falas dos sujeitos locais com os dados e informações oficiais, terá grande relevância explicativa para compreender a visão de mundo dos adolescentes e jovens inseridos num contexto engendrador de desigualdade, violência e etiquetamento social. Espera-se, ao final da realização da pesquisa, ressaltar importância da teoria crítica dos Direitos Humanos e de práticas sociais que valorizam a cultura democrática participativa no âmbito do poder local e contribuir para o aperfeiçoamento da criação e execução de políticas públicas voltadas à superação das desigualdades e à utilização de mecanismos sociojurídicos pacíficos na solução dos conflitos. Como a pesquisa de campo ainda está em fase de definição dos instrumentos metodológicos e coleta de informações junto aos sujeitos definidos como alvo da pesquisa, o trabalho irá expor algumas

reflexões que servirão de suporte à explicação sociológica do problema proposto, bem como a viabilidade do modelo de Justiça Restaurativa como alternativa anticriminalizadora na abordagem e solução de conflitos juvenis.

## **2. JUVENTUDE E GLOBALIZAÇÃO: IDEOLOGIA DO CONSUMO E ITINERÁRIO PENALIZADOR**

A ênfase ideológica ao livre mercado e ao investimento midiático na fragmentação de valores, escreve Bauman (2007, p.40), apesar de conferirem grande visibilidade aos movimentos portadores de “identidades autorreferenciais” e reconhecimento de direitos, convivem com a existência de desigualdades econômicas e sociais que impedem a elaboração de políticas públicas de inclusão social capazes de efetivar formas de sociabilidade e solução de conflitos nos marcos de uma cultura democrático-participativa e anticriminalizadora. No plano político, a existência de discursos e práticas institucionais restritas a ideia de democracia representativa e ênfase aos saberes técnico-burocráticos não conseguem superar inúmeras situações cotidianas dos jovens provenientes das classes sociais subalternas, em especial, daqueles que estão à margem dos bancos escolares e figuram como autores de atos infracionais. Mesmo nas situações em que a democracia multicultural acentua o reconhecimento, a integração e a inclusão diferencial das minorias, é possível constatar que o modelo institucional e democrático em curso tende a conviver com discursos e práticas político-institucionais sociais que buscam promover, simultaneamente, os direitos das minorias e a difusão de interesses econômicos e ações institucionais excludentes, de recorte neoliberal.

Desde as últimas décadas do século passado até o presente, as coalizões político-partidárias que ocuparam ou ocupam postos-chave no aparato de Estado estão, em alguma medida, subordinadas a plataformas políticas que suscitam a defesa e afirmação de direitos e, ao mesmo tempo, solidarizam-se com medidas econômico-financeiras que diminuem o custo e intervenção social do Estado tornando-o racionalmente mais criminalizador do ponto de vista social e mais econômico em favor do lucro privado. A ênfase do discurso empresarial em torno

dos ganhos de produtividade, racionalidade administrativa, meritocracia e eficácia gerencial, que serve de modelo às grandes corporações econômico-financeiras e comerciais, tende ser incorporada nos planos de gestão e ação e estatal. A respeito das desigualdades sociais, escreve Lima (2009, p.49-50), as novas orientações da política de “responsabilização dos pobres subvencionados pelo Estado”, tal como evidencia a mudança recente da legislação que dispõe sobre os benefícios do seguro desemprego, buscam instituir mecanismos legais que impõe maior disciplina, constrangimento ao trabalho e diminuição da cultura da dependência<sup>4</sup>.

Para autores como Wacquant (2015) a expansão do capitalismo econômico-financeiro informacional neoliberal tem provocado, ao lado da pobreza, novas configurações do espaço urbano, fazendo emergir o conceito de marginalidade avançada.

## **2.1. Pobreza e o conceito de marginalidade avançada na era do capitalismo globalizado.**

Apesar das profundas desigualdades sociais reinantes no Brasil até 1980, o cotidiano da vida urbana do país permitia, por assim, dizer que as classes sociais subalternas pudessem, além de compartilhar a visão de mundo que permeava o universo das classes médias burguesas, transitar livremente pelas ruas, já que as primeiras possuíam em relação as segundas uma espécie de crédito simbólico que legitimava os pobres ostentarem o benefício moral do bom comportamento, da disciplina ao trabalho e do respeito à ordem legal estabelecida.

Um dos efeitos da concepção moral virtuosa em relação à pobreza conferia aos pobres a possibilidade de estabelecer relações de proximidade físico-espacial com setores da classe média. A partir dos anos de 1990 a ampliação das desigualdades sociais e colapso da crença do monopólio estatal no uso da violência legítima aumentou o ceticismo das classes médias na capacidade de as instituições estatais conterem a violência urbana. Desde então, escreve o autor, os espaços penalizados constituem ou ameaçam constituir "componentes permanentes da

---

<sup>4</sup> De acordo com Decreto Nº 8.118, DE 10 DE OUTUBRO DE 2013º, o “trabalhador que solicitar o benefício a partir da segunda vez, dentro de um período de dez anos, terá que fazer curso com o mínimo de 160 horas para receber o pagamento”.



paisagem urbana". A miríade de discursos "jornalísticos, políticos, burocráticos, científicos ou vindos de baixo/interações da vida cotidiana" tende macular ou sobrepor-se aos estigmas já operantes de pobreza, pertença étnica e imigração. Neste caso, o local de moradia representa a desvantagem adicional de "desqualificar um indivíduo e privá-lo da total aceitação pelos outros" (Wacquant, 2015, p.15). Em relação às cidades, por exemplo, a antiga noção de utilização do espaço urbano comum a todos deu lugar ao tráfico de drogas, especulação imobiliária e privatização do espaço público sob a forma de condomínios fechados. A ruptura da ideia clássica de cidade pela a de enclaves urbanos/pedaços de cidades vem ocorrendo, de modo paralelo, a noção de afirmação e reconhecimento de cidadanias diferenciadas.

No caso dos jovens pobres e em conflito com a lei, as políticas públicas nas quais eles figuram como público-alvo são pouco atrativas no sentido de convencê-los a optar por formas de inserção legal no mercado de trabalho, uma vez que, na avaliação dos próprios jovens supostamente beneficiados, as políticas oficiais de inclusão social negam-lhes possibilidades de sucesso profissional, acesso à cultura de consumo, enfim, à construção de projetos de vida que lhes propiciem mobilidade social ascendente, realização pessoal, prestígio e reconhecimento social. As possibilidades de realização destes objetivos requerem a sensibilização das autoridades políticas e peritos sociais no sentido de repensar o modelo de organização e gestão dos aparelhos de Estado e incorporar novos valores e desafios no campo da elaboração, execução e monitoramento de políticas públicas dirigidas à juventude pobre. Em termos concretos, as políticas públicas juvenis de solução de conflitos (MSE) deveriam, para além de definir o público-alvo e imaginar soluções a partir da hierarquia e competência técnica, permitir que os destinatários, familiares e comunidade local figurem como sujeitos ativos nos processos de escolha e metodologia operativa das alternativas institucionais, tanto em relação aos mecanismos sociojurídicos de solução de conflitos quanto da oferta de cursos profissionalizantes, uma vez que ambas em situações diferentes afetam a liberdade, autonomia e o destino dos jovens no bairro e na sociedade mais ampla.

A recorrência de discursos oficiais em torno da segurança pública denota, como já foi dito, a deterioração dos mecanismos legais de contenção da violência urbana,

sem, contudo, oferecer alternativas econômicas e profissionalizantes condizentes para enfrentar e resolver a questão nos marcos da constituição democrática e respeito aos direitos e garantias fundamentais dos jovens brasileiros. Dentre inúmeros atos de violação dos Direitos Humanos que ocorrem no país merece destacar ação cotidiana dos aparelhos oficiais de repressão e controle. Em que pese a importância da constituição vigente, da democracia pluripartidária e de iniciativas governamentais preocupadas em reverter o histórico de desigualdades e exclusão social, a realidade econômica, política e institucional brasileira ainda permanece caracterizada pela ausência ou fragilidade dos mecanismos institucionais de controle popular sobre o Estado, seletividade do sistema de justiça criminal<sup>5</sup>, inflação da população carcerária e excesso de corpos confinados temporariamente, aguardando julgamento judicial e abertura de vagas nas prisões.

Em face desta situação, autores como Baratta (2002), Garland (2008) Passetti (2003) afirmam que a incapacidade de as autoridades públicas agirem de acordo com princípios constitucionais democráticos de defesa e efetivação de direitos individuais e coletivos, em especial, no campo da segurança pública, dá vazão à ideia de que a sociedade deva conviver com a rotina da normalização do crime e violação cotidiana dos Direitos Humanos, incluindo a prática endêmica de homicídios juvenis, roubos sem vítimas fatais, furtos, arrombamentos de residências e veículos, entre outros.

Pressões econômico-políticas externas e decisões políticas internas que resultam na retração de direitos sociais, expansão do trabalho informal e precário, especulação imobiliária e segregação do espaço urbano, aliado à facilidade de acesso a armas de fogo explicam, ao menos em parte, o fato de muitos jovens pobres estarem mentalmente dispostos a vender sua força de trabalho à indústria de controle do crime. A este respeito, escreve Passetti (2003), enquanto a era da sociedade capitalista industrial, fez surgir “os exércitos industriais de reserva” à espera de uma oportunidade de inserção no mundo legal do trabalho, o capitalismo globalizado e tecnológico fez expandir os “exércitos ilegais no narcotráfico, regulamentações de comércios ambulantes, crescimento do lumpemproletariado” e a proliferação de indivíduos drogados e tidos como moralmente indesejados, cuja

---

<sup>5</sup> De acordo com os autores citados neste parágrafo, a maioria dos atos e comportamentos considerados crimes pela legislação penal não são denunciados e/ou não resolvidos pela polícia.

condição pode ser aproveitada como matéria-prima à indústria do controle/capitalismo eletrônico, sindicato de carcereiros, políticos e especialistas preocupados em “denunciar a guerra entre pessoas potencialmente perigosas”. (Passetti, 2003, p.175).

No caso dos jovens pobres, as políticas públicas nas quais eles figuram como público-alvo parecem ser pouco atrativas no sentido de convencê-los a optar por formas de inserção legal no mercado de trabalho, uma vez que, na avaliação dos próprios jovens beneficiados, tais políticas negam-lhes a busca de sucesso profissional e acesso à cultura de consumo, enfim, possibilidades de construção de projetos de vida que lhes propiciem mobilidade social ascendente, perspectiva de realização pessoal, prestígio e reconhecimento social. Diante do exposto, impõe-se às autoridades políticas, burocráticas e acadêmicas repensar, em primeiro lugar, o modelo burocrático-centralizador que orienta a elaboração das políticas jurídicas de solução de conflitos. Para além, portanto de definir o público-alvo e imaginar soluções sem a sua presença e consentimento, as instituições e autoridades burocráticas deveriam pensar na criação de espaços institucionais abertos à participação e à atribuição de poder de decisão aos sujeitos-alvo e comunidade local nos processos de escolha e definição dos mecanismos de solução dos conflitos nos quais os adolescentes e jovens estão envolvidos.

Dentre as opções político-acadêmicas mais condizentes com a defesa e proteção dos direitos humanos é importante destacar algumas reflexões e possibilidades de aplicação da justiça restaurativa. A Organização das Nações Unidas (ONU), apoiada em relatórios oficiais e pesquisas acadêmicas, tem recomendado que países como o Brasil reorientem suas políticas criminais retributivas e encarceradoras e encoraje iniciativas institucionais que, preservando os direitos e garantias fundamentais conquistados, ofereça alternativas político-jurídicas opostas à cultura punitiva e abertas à participação comunitária, encorajando o envolvimento das partes que causaram ou sofreram agressão física, moral e simbólica ou perdas materiais. Em razão da novidade conceitual dos princípios político-jurídico que estruturam e orientam as práticas de justiça restaurativa, é importante fazer uma síntese deste modelo proposto de solução de conflitos.

### 3. CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS ACERCA DA JUSTIÇA RESTAURATIVA

Do ponto de vista histórico, escreve Jaccoud (2005), a centralização do poder nas sociedades ocidentais, caracterizada pelas monarquias de direito divino e consolidação do Estados modernos, irá “reduzir consideravelmente [as] formas de justiça negociada” que caracterizavam o modo de organização das sociedades comunais europeias e coletividades nativas. Neste contexto histórico de organização econômica, política e sociocultural, caracterizado pelo predomínio dos interesses coletivos sobre os interesses individuais, as “práticas de regulamento social [eram] centradas na manutenção da coesão do grupo”, razão pela qual, tais sociedades são consideradas como as precursoras da Justiça Restaurativa. (Jaccoud, 2005, p.164-165).

No caso das sociedades ocidentais contemporâneas pós-século XX, o ressurgimento da justiça restaurativa está vinculado a uma complexa conjuntura que abarca desde a contribuição acadêmica da Escola de Chicago, passando pela contestação das instituições repressivas, redescoberta da vítima na segunda guerra mundial e à exaltação da comunidade local no encaminhamento dos conflitos de base comunitária. Neste contexto de crítica às formas verticalizadas de organização do poder, incluindo o Estado, a Justiça Restaurava, ao afirmar o protagonismo da vítima e da comunidade local, ressurgiu como possibilidade “de construção e afirmação história dos direitos humanos”. (De Vitto, 2005, p.46).

Segundo Jaccoud (2005), o interesse acadêmico e cultural pela Justiça Restaurativa está ligado a acontecimentos políticos, sociais e jurídicos que ocorreram dentro e fora do campo penal. Dentre as transformações mais importantes já referidas neste trabalho, o autor destaca a desagregação do modelo estatal de bem estar-social, a crescente diferenciação e maior complexidade das relações sociais, o simbolismo jurídico, o maior protagonismo da sociedade civil e, mais recentemente, “o surgimento do neoliberalismo e a fragmentação dos centros de decisões [que] remodelaram profundamente as relações entre os cidadãos e o Estado”. No caso da segurança pública, a globalização neoliberal tem forçado o

Estado a limitar seu foco de ação e enfrentamento a delitos graves como latrocínios, sequestros, homicídios e, ao mesmo tempo, deixar em aberto e sem intervenção oficial a ocorrência de uma massa de crimes comuns como furtos arrombamentos, agressões não fatais. Neste último exemplo, a pretensão das autoridades públicas é responsabilizar a sociedade civil pela prevenção e controle do crime.

Em relação ao que foi dito no paragrafo anterior, é imprescindível esclarecer que a apropriação política da noção de comunidade não significa preencher o “vazio deixado pela retirada progressiva do Estado em suas atividades de controle do crime”. (Jaccoud, 2005, p.166). O interesse e a defesa da Justiça Restaurativa de base comunitária não significam aceitar, nem aderir a reformas políticas neoliberais fundamentadas na teoria da escolha racional que buscam, segundo Garland (1999, p.66), associar a ocorrência do crime a uma questão de oportunidade e, em consequência, legitimar a transferência do controle e gestão dos conflitos criminais do Estado para os grupos privados.

Do ponto de vista teórico mais amplo, a aceitação cultural da Justiça Restaurativa está ligada à contestação da legitimidade estatal na gestão dos conflitos comumente definidos como crime. Isso implica à necessidade de questionar tanto a definição de crime como verdade ontológica quanto à inevitabilidade da punição como seu correlato indissociável.

#### **4.4 Entre a manutenção do paradigma político-criminal penalizador e a viabilidade de práticas de Justiça Restaurativa.**

Nos planos ideológico e cultural, escreve Melo (2005, p. 57), o direito à coerção, é balizado pelo discurso filosófico universalista e racionalista de Kant, o qual reporta à “questão do respeito ao dever para fundamentar a liberdade como expressão de adesão a uma máxima universal”, cujo obstáculo impõe a necessidade incondicional do castigo. Segundo Melo, este modelo racional de pensamento à serviço da justiça retributiva supõe:

*[...] a construção de um sistema e de uma regra aplicável a toda e qualquer circunstância, independentemente dos objetos externos, dos sentidos, dos desejos, das expectativas expressa, inegavelmente, um valor subjacente: o de ordem, controle, fixidez, segurança, colocado de modo inquestionado como uma verdade por si mesma evidente. A necessidade do castigo, num sistema como tal, decorre da estruturação rígida de um modelo lógico de*

*concepção da sociedade, fundada em valores tais que, para fazer valer sua universalidade, qualquer erro ou desvio deve ser extirpado. (Melo, 2005, p.57-58).*

Para o autor, o modelo político jurídico de construção da liberdade formal se apresenta em termos de pura lógica e, por isso, apenas desta maneira seria possível “respeitar o princípio básico de não-contradição ditando a inevitabilidade do castigo e da punição. Logo, no que diz respeito à liberdade em termos universais, “a coerção e o castigo apresentam-se como a condição para a coexistência humana”. Este modelo de raciocínio iluminista serve de base à estruturação lógica do direito formal abstrato o qual, uma vez “pensado logicamente e [operado] coercitivamente [manifesta] horror à transitoriedade, à mudança e ao movimento, ao incomensurável, à diferença, em suma, ao desaparecimento [de] sentimentos que aparecem em toda situação de conflito”. No plano ideológico, a ordenação deste modelo jurídico que abriga “uma ordem moral fundada na culpa e no castigo”, além de ocultar estratégias de dominação, considera inevitável retribuir o sofrimento como algo “natural, aceitável, desejável”. (Melo, 2005, p.58-59).

No plano sociológico, as dificuldades de aceitação e aplicação do modelo de justiça restaurativa estão associadas, num primeiro momento, a interesses burocrático-corporativos e à apropriação de capital acadêmico pelos peritos oficiais cujas competências universitárias adquiridas, além de se inscreverem na luta para monopolizar determinados campos de atuação profissional, servem para por em evidência o poder de competências chanceladas e legitimadas pelos aparelhos de Estado.

Ao contrário do modelo político-criminal centrado na valorização e apropriação de saberes típicos das elites acadêmico-burocráticas, a nova proposta de solução de conflitos propõe dar voz e poder de decisão aos atores diretamente interessados. Este debate é política e academicamente relevante uma vez que põe em discussão o imperativo da participação popular e os limites da meritocracia acadêmica enquanto fonte apropriadora do saber-poder a respeito da melhor solução dos conflitos que afligem a vida da comunidade. Autores como Bourdieu (2004) afirmam que a meta dos peritos autorizados pelo Estado é delimitar seu campo de ação, competência e hierarquia, ao fazê-lo, desqualificar os não iniciados etiquetando-os como leigos e ignorantes.

Portando, em oposição às políticas criminais de caráter centralizadora e fundadas na lógica do encarceramento em massa, a Justiça restaurativa acredita que os problemas sociais possam e devam ser resolvidos mediante a construção de soluções político-jurídicas que optam pela descentralização do poder, participação e envolvimento direto da comunidade local no encaminhamento das soluções aos problemas que lhe dizem respeito. Neste sentido, o modelo de justiça restaurativa constitui um sistema teórico-valorativo fundamentado nos princípios de corresponsabilidade de todos os envolvidos na infração (vítima, infrator e demais interessados) na busca de respostas e soluções que causaram o dano ou a agressão. Pressupõe que as pessoas e famílias que vivem comunidade possam “ter mais o que dizer” em face de um “mundo dominado pelos grandes negócios, por políticos profissionais e tecnocratas” que se intitulam como portadores de uma consciência superior (Scuro Neto, 2007).

As práticas de justiça restaurativa, ao contrário da democracia representativa considerada, muitas vezes passiva, estática e limitada a convidar as pessoas a confiarem na justiça e proteção do Estado, salientam a importância de edificar relações horizontais de poder, incluindo o poder jurisdicional. Ou seja, este modelo de solução de conflito requer ativismo democrático de base comunitária e práticas de sociabilidade fundadas no exercício da democracia dinâmica a qual, paralela à intervenção das autoridades do Estado, conclama a participação e responsabilização da comunidade nos processos de tomada de decisão e escolha dos meios sociojurídicos, priorizando os de natureza civil/reparação, como forma de resolver os conflitos que ocorrem e afetam a vida da comunidade.

Em termos práticos, o desafio da Justiça Restaurativa diz respeito à capacidade de mobilização e ação da sociedade civil organizada, ou seja, lideranças comunitárias, técnicos sociais, Organizações não governamentais, pastorais, etc., de estabelecer, ao lado do Estado, mecanismos alternativos mais democráticos e mais eficazes de solução dos conflitos juvenis.

## CONSIDERAÇÕES FINAIS.

Em face do novo contexto econômico e sociocultural que amplia as desigualdades sociais, acelera mudanças culturais e aprofunda a descrença juvenil perante os valores, capacidade de controle e formas de representação política das instituições tradicionais, a opção por formas horizontais de participação e deliberação comunitária, sem negar a existência das instituições de Estado, pode conferir maior legitimidade na condução e resolução dos diversos problemas que afligem o cotidiano da juventude pobre.

A Justiça Restaurativa, ao prever que os diversos conflitos que afligem a vida comunitária possam ser resolvidos ou minimizados através da utilização de mecanismos sociojurídicos de reparação do dano e/ou minimização do sofrimento causado a outrem, representa um caminho promissor de defesa e proteção dos direitos humanos juvenis na sociedade atual.

A sensibilização e mobilização direta da comunidade no encaminhamento e solução dos problemas que lhe diz respeito contribuem compreender e melhor explicar como muitos jovens formulam seu pensamento e estabelecem novos referenciais de valores e padrões de sociabilidade considerados legítimos perante seus pares e à sociedade. Saberes e práticas fundamentadas na Justiça Restaurativa possibilitam, ainda, não apenas ampliar o conteúdo democrático que confere reconhecimento à pluralidade de vozes e sujeitos que ainda hoje são pensados de cima pra baixo, mas repensar o modelo político-jurídico punitivo, burocrático e centralizador de solução dos conflitos.



## REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS

BARATTA, Alessandro. **Criminologia crítica e crítica do direito penal: introdução à sociologia do direito penal**. 3.ed. Rio de Janeiro: Revan, 2002.

BAUMAN, Zygmunt. **Vida Líquida**. Rio de Janeiro: Zahar, 2007.

BOURDIEU, Pierre. **Coisas ditas**. São Paulo: Brasilense, 2004.

BRASIL (PALACIO DO PLANALTO) [DECRETO Nº 8.118, DE 10 DE OUTUBRO DE 2013](#): Altera o Decreto nº 7.721, de 16 de abril de 2012, que dispõe sobre o condicionamento do recebimento da assistência financeira do Programa de Seguro-Desemprego à comprovação de matrícula e frequência em curso de formação inicial e continuada ou de qualificação profissional, com carga horária mínima de cento e sessenta horas.

DE VITTO, Renato campos Pinto. Justiça Criminal, Justiça Restaurativa e Direitos Humanos. In: Slakmon, C., R. De Vitto, e R. Gomes Pinto (org.). **Justiça Restaurativa** (Brasília – DF: Ministério da Justiça e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD), 2005.

GARLAND, David. As contradições da "sociedade punitiva": o caso britânico. In: Discursos Sediciosos: Crime, direito e sociedade (Instituto Carioca de Criminologia). Rio de Janeiro, v.11, 1o sem/2002.

JACCOULD, Mylène. Princípios, tendências e procedimentos que cercam a Justiça Restaurativa. In: Bastos, Márcio Thomaz; Lopes, Carlos e Renault, Sérgio Rabello Tamm (Orgs.). **Justiça Restaurativa: Coletânea de Artigos**. Brasília: MJ e PNUD, 2005. Disponível em: [www.justica21.org.br/interno.php?ativo=BIBLIOTECA](http://www.justica21.org.br/interno.php?ativo=BIBLIOTECA).

LIMA, Cezar Bueno. **Jovens em conflito com a lei: liberdade assistida e vidas interrompidas**. Londrina: EDUEL, 2009.

MELO, Eduardo Rezende. Justiça restaurativa e seus desafios histórico-culturais Um ensaio crítico sobre os fundamentos ético-filosóficos da justiça restaurativa em contraposição à justiça retributiva. In: Slakmon, C., R. De Vitto, e R. Gomes Pinto, (org.). **Justiça Restaurativa** (Brasília – DF: Ministério da Justiça e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD), 2005.

PASSETTI, Edson. **Anarquismos e sociedade de controle**. São Paulo: Cortez, 2003.

WACQUANT, Loïc. A estigmatização territorial na cidade da marginalidade avançada. Disponível em: <http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/4618.pdf>. Acesso em 17/02/2015.

## LO QUE NOS FUERZA A SER: DELEUZE, LA SUBJETIVIDAD Y SUS CONSECUENCIAS PARA LA NOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

ELADIO CRAIA  
PUC - PR

### Resumo:

A partir de certas leituras atuais sobre o problema geral e ubíquo da Técnica contemporânea, uma disjuntiva se apresenta como inevitável; podemos caracterizar suas posições esboçando uma breve, porém eficaz caricatura de ambas: ou o mundo pode, - e será-, libertado de suas limitações naturais pela ação do pensar técnico-científico, ou será, fatalmente, condenado pelo domínio de certo tipo único de manifestação do ente, isto é, o modo de ser técnico do existente. No entanto, esta oposição encobre uma afinidade íntima e essencial. Em ambos os pontos de vista, a Técnica é múltipla, porém reconhecível em seus traços fundamentais, por outro lado, ela é pensada como homogênea e totalizadora; o mundo se encontra, para bem ou para mal, destinalmente, condenado a sua regência. Assim sendo, o estatuto e os predicados, (sociais, culturais, afetivos, etc.), desta "coisa que nos mesmo somos", também se encontram organizados pela capilaridade técnica. Sobre este tópico abundam as reflexões, seus perigos, virtudes, e predicados são na nossa época histórica amplamente debatidos. Reconhecendo o fato de que isto que somos se encontra em causa neste debate, não é possível deixar de lado as implicações da abrangência técnica sobre o conjunto de direitos que laboriosamente nossa cultura promoveu nas últimas décadas. Tentando não cair novamente em querelas já consolidadas sobre as vantagens ou perigos do técnico para nossos direitos, o presente trabalho pretende indicar uma linha de abordagem diferente que possibilite superar esta condição. O horizonte geral da análise será aberto pela pergunta entorno do estatuto ontológico da Técnica, a partir dos conceitos oferecidos pela ontologia "virtual" de Gilles Deleuze. Neste sentido, a questão nevrálgica passa por considerar, desde a filosofia deleuziana, este universo técnico, não como homogêneo e determinado por uma unidade endógena, mas como multiplicidade autodiferenciada. A noção de virtual é a peça central, em chave ontológica, para pensar que o mundo não será sepultado pela voracidade neutra e automática do modo de ser técnico, nem que o existente será docilmente configurado pela ciência e pela técnica contemporâneas. Pelo contrário, a Técnica é uma "produção" que opera pela atualização singular de um campo virtual animado internamente pela Diferença, entendida como Ser. Com Deleuze é possível afirmar que a tecnologia nada acaba, encerra, ou enclausura, uma vez que ela compõe, que se relaciona com as forças do homem. Com que novas forças, insiste Deleuze, e que nova forma surge deste composto? Analisar brevemente este horizonte reflexivo será o objetivo central deste texto.

**Palavras chave:** Direitos Humanos; Deleuze; técnica; virtual.

## Autenticidade humana na era da tecnociência

Anor Sganzerla

PUC - PR

### Resumo:

Esta reflexão pretende analisar sob uma perspectiva filosófica a ameaça à autenticidade da vida humana numa época fortemente marcada por grandes possibilidades de “melhorias” promovidas pelo progresso da ciência e da técnica. Esse impulso de “aperfeiçoamento” por sua vez une diferentes interesses, pois de um lado temos o desejo humano de “imortalidade” e de “perfeição” de sua constituição biológica e, de outro, o poder técnico-científico com capacidade e poder de promover tal realização. Se no passado recente compreendia-se que a essência humana era imodificável pelo agir do próprio homem, e somente um poder divino poderia promovê-la, na atualidade a técnica tornou-se capaz de realizar o que antes era apenas um sonho, o que torna urgente ampliar a reflexão ética para além do tempo presente, de modo a assegurar a continuidade da vida autêntica no futuro. Embora em sentido filosófico não se tenha consenso sobre o limite entre o autêntico e o inautêntico, nessa reflexão assumimos a posição de que a autenticidade da vida está diretamente ligada à continuidade da *liberdade* e da *mortalidade*. Com isso, na medida em que se pretende interferir para promover a “perfeição” e a “imortalidade” humana, estamos contribuindo para tornar o homem inautêntico, porque a imperfeição é decorrente da liberdade humana e a mortalidade parte da nossa constituição. Ou seja, quanto mais “perfeitos”, menos livres e mais inautênticos, porque a liberdade liga-se a imperfeição. E quanto mais “imortais” menos humanos, conforme expressa o bioeticista: “*O homem vai morrer quando não morrer mais*” (Francis Fukuyama).

**Palavras-chave:** autenticidade - civilização tecnológica - liberdade – finitude.

## **Juventude e Direitos Humanos: a participação social como forma de resistência ao itinerário penalizador juvenil na periferia de Curitiba-PR**

CESAR BUENO  
PUC-PR

### Resumo:

O objetivo da pesquisa é compreender o fenômeno da violência juvenil urbana na periferia de Curitiba por meio do censo populacional juvenil e análise de variáveis relativas à desigualdade econômica, local de moradia, perfil familiar, acesso e permanência escolar, cor da pele e formas de acesso (ou ausência) às políticas públicas. No plano teórico, a pesquisa busca evitar análises simplificadoras e reducionistas, uma vez que diversos estudos apontam a incompletude em definir a pobreza econômica como causa da violência e do crime nas sociedades contemporâneas. Isso não significa, entretanto, ocultar e menosprezar o fato de as pessoas oriundas das classes sociais subalternas constituírem, por assim dizer, o núcleo preferencial da ação cotidiana do sistema de justiça criminal dirigido a jovens e adultos. Como e porque isso ocorre sempre representou e ainda representa um desafio à abordagem sociológica e às demais ciências afins. Por isso, o suporte analítico da pesquisa se filia a concepções teóricas fundamentadas na existência das sociedades classistas cujo modo de produção se constitui a partir das desigualdades materiais, diferenças sociais, agrupamentos ideológicos e profissionais que asseguram a reprodução material e o distanciamento simbólico entre as diferentes classes sociais. Em relação à metodologia da pesquisa empírica, a definição de grupos focais terá grande relevância explicativa à compreensão da visão de mundo dos adolescentes e jovens moradores da Vila Torres assim como a de seus familiares, autoridades e lideranças locais, assim como no sentido de confrontar os dados e informações oficiais com a fala dos sujeitos juvenis inseridos em contextos engendradores de desigualdade, violência e etiquetamento social.

## **Direitos Humanos, tecnologia e gênero: sofrimentos e possibilidades.**

**Darli Sampaio**

PUC - PR

### **Resumo:**

O presente trabalho aborda as condições de inserção e as experiências vividas por discentes do curso de pedagogia, que se constitui enquanto um curso majoritariamente feminino, em uma instituição confessional católica e outra, pública. E, docentes do referido curso, formadas por estas instituições citadas, em pleno exercício da profissão, onde as utilizações de novas tecnologias no processo de ensino estão cada vez mais, sendo exigidas e utilizadas.

Entre os objetivos desta análise está a problematização das condições de inserção e inviabilização produzida acadêmica e politicamente, das (os) docentes e discentes através das narrativas de si, em torno das dificuldades explicitadas, sobre os processos de ensino e aprendizagem, sobre o seu mundo sociocultural historicamente situado, ou seja, através das narrativas, onde significados são expressos, mediante dinâmicas desafiadoras e dificultadoras da prática acadêmica e docente, em um curso genereficado, onde o domínio da tecnologia, pode ser um diferencial importante. Portanto a introdução da categoria “gênero”, neste trabalho, se faz importante, por ser um conceito aberto (TAMAMINI, 2000), mas comumente atrelado à identificação de desigualdades entre homens mulheres. E, de forma consciente ou inconscientemente, age como elemento organizador do trabalho, estruturando, promovendo e legitimando a aderência de valores, regidos por uma divisão sexual do trabalho que não é neutra, mas orientada e assimétrica. É, portanto, histórico e moral, com papéis sexuais definido com maior rigor normativo e explicativo. (HIRATA, 2009). Revela a insuficiência dos corpos teóricos das Ciências Sociais especialmente na análise, e possivelmente, na incapacidade de oferecer não uma explicação – mas um tratamento adequado à desigualdade entre homens e mulheres, portanto, na contramão dos direitos humanos. (Carrasco, 1998). E, pelo que se observa a educação, um campo que se constitui em um universo considerado “feminizado”, não tem se destacado enquanto um campo privilegiado de práticas novas e emancipatórias, no que diz respeito à discussão ou desconstrução de gêneros, em que se pese o crescimento de estudos na área de gênero, permanece oculta uma desigualdade de papéis e vantagens, que mantém as mulheres em uma condição de desfavorecimento, e de desrespeito histórico aos direitos humanos.

**Palavras chave:** Direitos Humanos; tecnologia; gênero; sofrimento.

## Hans Jonas e questão da utopia tecnológica como ameaça ao Patrimônio Genético Humano

Geovanni Moretto

PUC - PR

### Resumo:

Hans Jonas dedicou grande esforço para compreender a nova dinâmica da técnica na era moderna, assim como os riscos e perigos que ela provoca. Isto porque na modernidade, a técnica atinge quase tudo o que concerne a vida e transformou-se numa utopia que nos leva a crer que a vocação humana se encontra no contínuo progresso rumo a feitos cada vez maiores. O poder autônomo da técnica denunciado por Hans Jonas colocou fim na ideia do *homo sapiens* como aquele que orienta o *homo faber*. Isto porque entre as aplicações da *techne* moderna, há uma categoria de ações considerada por Hans Jonas potencialmente a “mais funesta”, que é a aquela em que o *homo faber* aplica sua arte sobre si mesmo e se habilita a refabricar o próprio homem. Tal problema apontado pelo autor é cada dia mais concretizável, pois a manipulação genética da natureza humana em laboratório é uma realidade que desperta preocupação, já que os avanços no que tange o patrimônio genético humano podem ser transferidos para as gerações posteriores de um modo irreversível, abrindo assim, a possibilidade de transformação do patrimônio genético humano. Tal intento pode ser denominada no pensamento de Hans Jonas como “dinâmica utópica” ou “inclinação utópica” inerente ao agir humano sob as condições da técnica moderna. Ou seja, o poder tecnológico transformou aquilo que costumava ser exercícios hipotéticos da razão especulativa em esboços concorrentes para projetos executáveis. Neste cenário, a natureza do nosso agir foi alterada, pois mesmo de forma indesejada, nossas ações são permanentemente carregadas de “utopismo”. É neste ponto que reside o tema central desta pesquisa: o novo cenário tecnológico traz consigo a demanda de novos valores, não em virtude de uma relativização dos valores tradicionais, mas à sua não aderência às exigências do novo tempo. Por isso a urgência de novos fundamentos para a ética, de modo a proteger o homem diante do poder ameaçador da técnica, visto que o agir humano modificado também impõe uma modificação da ética. Nesse sentido, Hans Jonas critica severamente os objetivos da tecnologia contemporânea ao inserir o homem como objeto e afirma que tal intento, desafia o último esforço do pensamento ético, que deve pensar alternativas para o que sempre foi considerado definitivo na constituição humana, como a mortalidade e a liberdade.

**Palavras chave:** Jonas; tecnologia; utopia; genética.

## **ALGUMAS OBSERVAÇÕES SOBRE VIOLÊNCIA E RELIGIÃO A PARTIR DO CASO "CHARLIE HEBDO"**

PROF. DR. Horacio Luján Martínez (PUCPR – Campus Curitiba)

### RESUMO

Há uma distinção fundamental entre a violência e a religião? Não estamos perguntando-nos isso de modo retórico, com o capcioso objetivo de deslegitimar e/ou colocar no campo do "impensável" o fundamentalismo religioso. O jornalismo de massa consegue erigir essa ideia, e se santifica a si mesmo em nome de uma "liberdade de expressão" que parece, só eles detentam.

Há que ter claro, primeiro, que o terrorismo e seus atos, só expressam impotência política. Um grupo terrorista tem o seu germe no fato de que não pode disputar de igual a igual o que podemos chamar, de modo geral, "espaços de poder". Por isto, o terrorista antes do que "aterrorizar" para mudar opiniões, hábitos e costumes das suas vítimas e da sociedade vitimizada, o que realmente procura é publicidade para seu ato de violência.

A pergunta que trataremos na nossa leitura é si essa suposta impotência do terrorismo fundamentalista é produto de uma escolha que evidencia que Oriente e Ocidente são absolutamente inconmensuráveis na hora de comparar suas costumes éticas, políticas e religiosas, ou se há, nessas diferenças uma amostra de que a "aldeia global" em verdade precisa de seus fantasmas e de sua sinistra floresta onde as covas de Afeganistão encarnem o exemplo de "non plus ultra", geográfico e moral. Perguntar-nos se há oposição ou complementariedade entre estes "modelos sociais" talvez ajude a pensar em algo mais frutífero que o "choque de civilizações".

## **A tecnologia considerada do ponto de vista ontológico e ético na filosofia de Hans Jonas**

Prof. Dr. Jelson Oliveira

PUC-PR

### **Resumo:**

Se a técnica pode ser considerada, do ponto de vista ontológico, uma vocação humana, ela representa também uma estratégia de sobrevivência diante da fragilidade e da precariedade da vida, vindo a se tornar um poder. Para Hans Jonas, nesse sentido, a técnica é um poder que se constitui como um ato de liberdade necessária e como abertura diante do mundo. Ora, onde habita a liberdade também cresce o perigo: a técnica se apresenta como um risco e uma ameaça, principalmente em sua dinâmica formal, entendida como uma “empresa coletiva” que segue leis de movimento próprias e que se apresenta, na modernidade, como “totalidade abstrata de movimento”, ou seja, como tecnologia. Algo que se diferencia do modo pré-moderno da técnica, entendida como um uso de ferramentas e dispositivos artificiais que levavam a um equilíbrio entre fins reconhecidos e meios adequados. Como poder, portanto, a tecnologia representa um desafio ético, exigindo um “poder sobre o poder”, a fim de minimizar os seus impactos sobre a natureza e o próprio homem que, de sujeito, passou a ser também ele um objeto tecnológico. A partir desse diagnóstico Jonas formula a sua ética da responsabilidade, cuja viabilidade e eficácia merecem análise. Eis o objetivo do presente trabalho.

**Palavras-chave:** técnica; tecnologia; ética; Hans Jonas.